

***Campaña Interagencial contra la Violencia
hacia las Mujeres y las Niñas***
(UNIFEM - PNUD - UNICEF - FNUAP - CEPAL - ACNUR - ONU-SIDA -
UNHCHR)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
PNUD

Proyecto Regional RLA/97/014
***Informes Nacionales sobre la Situación de
la Violencia de Género contra las Mujeres***

**INFORME NACIONAL
BRASIL**

DICIEMBRE 1998

CREDITOS

Coordinación General del Proyecto Regional

Aparna Mehrotra (junio 1998 - junio 1999)

Coordinación Técnica del Proyecto Regional

Ana Isabel García Quesada

Asistencia Técnica

Ana Hidalgo Solís

Responsables PNUD del Informe de país

Branca Moreira Alves, Representante UNIFEM/Brasil

Junia Conceicao Leonel, Oficial de Programa, PNUD/Brasil

Responsable de la Consultoría Nacional

Leila Linhares Barsted

Inicio y finalización de la Consultoría:

Octubre 1998 – Diciembre 1998¹

CONTENIDO

INTRODUCCION GENERAL

Introducción Metodológica

¹ La Coordinación Técnica del Proyecto solicitó en reiteradas oportunidades dar atención y respuesta a las observaciones realizadas a la versión preliminar del informe, entregada en diciembre de 1998. A noviembre de 1999, todavía no se podido compilar cierta información complementaria para los anexos. En este sentido, el informe esta considerada "todavía en progreso".

{ TOC \o "1-3" \p " " }

ANEXOS

ANEXO A Respuestas de la consultora Linhares a las observaciones de la Coordinación Técnica del Proyecto

Anexo A.1. Respuestas a las dudas de la Coordinadora Técnica.

Anexo A.2. Listado de personas e instituciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género en Brasil en los estados seleccionados para el Informe y en algunos otros estados brasileños.

Anexo A.3. Propuesta de trabajo de la Consultoría enviada por Leila Linhares a las responsables del Proyecto por PNUD y UNIFEM (octubre de 1998).

Anexo A.4. Respuesta de la consultora a las observaciones de la Coordinadora Técnica respecto a los servicios existentes (febrero de 1999)

ANEXO B Correspondencia, por correo electrónico, establecida entre las partes interesadas en el proyecto, Coordinación General, Coordinación Técnica, Responsables PNUD y UNIFEM y consultora contratada, en el presente año 1999.

Anexo B.1. Correo del 28 de enero.

Anexo B.2. Correo del 26 de febrero.

Anexo B.3. Correo del 1 de marzo.

Anexo B.4. Correo del 14 de abril.

Anexo B.5. Correo del 26 de abril.

Anexo B.6. Correo del 29 de abril.

Anexo B.7. Correo del 10 de mayo (y attachment).

Anexo B.8. Correo del 31 de mayo.

Anexo B.9. Correo del 1 de junio.

ANEXO C Texto de Consultoría para la Campaña Nacional UNA VIDA SIN VIOLENCIA ES UN DERECHO NUESTRO y para el Pacto Comunitario contra la Violencia Intrafamiliar, con énfasis en la situación de las mujeres y las niñas, elaborada por la consultora Leila Linhares.

INTRODUCCION GENERAL

En marzo de 1998, varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unieron sus esfuerzos para lanzar la Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres, cuyo lema es "Una vida sin violencia. Un derecho nuestro". Se trata del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONU-SIDA), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos (UNHCHR), el Alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). En varios países también se han unido otras agencias, como la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa de Gestión Urbana para América Latina y El Caribe de la Agencia Habitat (PGU-AL/HABITAT).

Esta Campaña se pensó como instrumento de sensibilización en el ámbito mundial sobre el flagelo de la violencia de género contra las mujeres, en el marco de la conmemoración de aniversario número cincuenta de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el quinto de la Declaración y Plan de Acción surgidos de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), así como en cumplimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Estos instrumentos normativos y compromisos mundiales son de fundamental importancia para la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Si bien la Declaración Universal expresa el carácter universal e indivisible de los derechos humanos de todas las personas, la Conferencia de Viena tuvo la virtud de reconocer que hablar de tales derechos no sólo implica los políticos, sino también los sociales, culturales y económicos. Es decir, a partir de Viena, la comunidad internacional reconoció que las personas tienen derecho a pensar libremente y a asociarse, pero también al desarrollo y a todos los derechos relacionados con éste (como la salud, la educación y vivir sin violencia...). Por su parte, la IV Conferencia de Beijing reiteró las conclusiones y compromisos asumidos en Viena en materia de derechos humanos de las mujeres, e identificó la lucha contra la violencia, como una de las doce áreas estratégicas de acción del Plan de Acción adoptado.

Específicamente relacionado con las mujeres, la Conferencia de Viena estableció la necesidad de éstas disfruten los derechos humanos en forma plena y en condiciones de igualdad con los hombres, y que ésta debe ser una cuestión prioritaria para los Gobiernos y para las Naciones Unidas. Entre otros aspectos importantes, esta Conferencia subraya la importancia de la plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de desarrollo; que la igualdad de condición de las mujeres y sus derechos humanos deben integrarse en las principales actividades de todo el Sistema de la ONU. Asimismo, enfatiza la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres y el extremismo religioso.

A partir de dicho marco normativo y referencial, las agencias del Sistema ONU mencionadas lanzan entonces la Campaña Interagencial "Violencia contra las Mujeres y las Niñas", la que ha producido, entre otros, varias publicaciones, un sitio en Internet, foros y talleres de sensibilización.

Además de participar en varias de las iniciativas de la Campaña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió en junio de 1998, contribuir con la realización de un proyecto regional para América Latina y El Caribe, con el fin de contar con "Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres" (Proyecto Regional RLA/97/014).

El objetivo general de este proyecto del PNUD consiste en la preparación de una serie de Informes Nacionales que recopilen, sistematicen, analicen y ofrezcan información actualizada sobre la situación de la violencia de género contra las mujeres en los diversos países, de manera tal, que oriente futuras acciones en este campo. Los objetivos específicos del proyecto son:

- Sistematizar la información disponible sobre la situación de violencia de género contra las mujeres en los diferentes países de la región, de acuerdo a un conjunto de indicadores y un formato diseñado por la Coordinación del Proyecto, de tal forma, que sea posible, con posterioridad, contar con una visión regional a partir de información nacional homologable.
- Colaborar con el mandato de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Violencia contra las Mujeres, en la recopilación de información relevante sobre la materia.
- Brindar información actualizada que permita conocer los avances logrados en los diferentes países en el cumplimiento de la Plataforma de Acción acordada en Beijing (1995).
- Visibilizar los vacíos y limitaciones en las respuestas institucionales y sociales al problema de la violencia de género contra las mujeres, detectados a partir del análisis de las experiencias en marcha en los países.
- Brindar orientaciones propositivas concretas para futuras acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres en cada país y en el ámbito regional.
- Documentar buenas prácticas o experiencias exitosas (actitudes, procedimientos, metodologías y acciones personales e institucionales adecuadas) en el abordaje del tema de la violencia de género contra las mujeres.

La Coordinación General del Proyecto Regional ha estado a cargo del Bureau para América Latina y El Caribe del PNUD, con sede en Nueva York, en las personas de Aparna Mehrotra a quien se debe la concepción, iniciación y coordinación del proyecto a nivel regional (entre junio de 1998 y junio de 1999) y de Danielle Benjamin (a partir de junio de 1999); en tanto la Coordinación Técnica del Proyecto Regional ha tenido como sede Costa Rica y ha sido encargada a Ana Isabel García Q., con la Asistencia Técnica de Ana Lorena Hidalgo.

La forma operativa de este proyecto ha consistido en la identificación por parte de las Representaciones nacionales del PNUD, de consultorías nacionales, las que, a partir de los términos de referencia preparados por el equipo de Coordinación Técnica del proyecto, han debido presentar un plan

de trabajo antes de iniciar sus trabajos. En la mayoría de los casos, esta forma de trabajo ha supuesto una estrecha comunicación (a través de medios electrónicos) entre las entidades/personas consultoras nacionales, la Coordinación Técnica del proyecto y las/os funcionarios destacados para tal efecto en cada Representación del PNUD (en su mayoría, Puntos Focales de Género).

De acuerdo a los términos de referencia, esta metodología contemplaba el apoyo por parte de las consultorías nacionales a la Representación del PNUD, en la organización y realización de dos reuniones: a) una al inicio del proceso para presentar el proyecto, sus alcances y objetivos, y solicitar el apoyo de todos los entes involucrados; y b) otra reunión una vez se haya avanzado (60% - 80%) en la preparación del informe preliminar; el objetivo de esta segunda reunión ha sido el de analizar los alcances del mismo, compartir resultados preliminares, identificar posibles vacíos de información (como ejemplos de buenas prácticas), y, especialmente, para legitimar el informe ante todos los sectores (gubernamentales, no gubernamentales, de cooperación).

Se ha recomendado que ambas convocatorias fueran lo más amplias posible procurando que asistan, al menos, los siguientes sectores y entidades: Oficina Gubernamental de la Mujer, Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Justicia; Organizaciones de la Sociedad Civil especializados en la materia (incluyendo organizaciones de mujeres), Poder Judicial, Policía, Defensoría de los Habitantes (si existe), Agencias Sistema ONU, Gobiernos cooperantes y otros que se consideren relevantes a la problemática (seguridad social, organismos de protección a la infancia, entre otros).

Durante la primera reunión, la consultora habría analizado, junto a las personas participantes, los alcances de la investigación y sus principales ejes de análisis, a fin de identificar posibles áreas de estudio no contemplados y relevantes para el país. Asimismo, se habrían identificado fuentes de información y aportes posibles desde las instituciones para nutrir la investigación y recopilado la información básica inicial para completar la demanda informativa incluida en los términos de referencia del proyecto.

Dichos términos de referencia del proyecto, también han recomendado que, si se identificara como necesario, durante el proceso de preparación del informe podían realizarse tantas reuniones de trabajo con los sectores involucrados como fuera requerido. Pero se ha hecho fundamental hincapié en la importancia y la necesidad de que se realizara la reunión final para legitimar el Informe Nacional ante los diversos sectores.

Como se ha mencionado, de acuerdo a los términos de referencia del proyecto, a partir de esta reunión inicial, la consultora debería remitir una propuesta de investigación y un plan de trabajo, para comentarios, tanto a la Coordinación General Regional de la iniciativa en Nueva York, como a la Coordinación Técnica en San José, a través de la Representación nacional respectiva del PNUD. Todos los asuntos administrativos han estado a cargo

de la Coordinación General, en tanto los aspectos técnicos y metodológicos han sido resueltos desde la Coordinación en San José.

Esta propuesta metodológica buscaba que los Informes Nacionales reflejen la multiplicidad de puntos de vista, acciones y entidades involucradas en la atención y prevención de la problemática, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, a través de entrevistas a informantes claves de todos los sectores, entrevistas o grupos focales de discusión, amplia revisión documental, etc.

La estrategia operativa y metodológica utilizada por cada consultora para preparar el Informe Nacional, aparece publicada en cada documento, así como un conjunto de anexos solicitados (personas/entidades entrevistadas, bibliografía, listado de organismos, etc.).

El trabajo de las consultoras nacionales ha consistido, fundamentalmente, en la recopilación, sistematización y análisis de toda la información documental y referencial disponible sobre el tema. Por ello, el proyecto solicitó a cada Representación nacional del PNUD, la identificación de la/s empresa o persona/s idóneas, para lo cual la Coordinación Técnica preparó un perfil y sugirió el envío de una terna para considerar la mejor opción.

Por otra parte, el proyecto contó con una propuesta de estructura para presentar los Informes, así como una guía para facilitar la comprensión de lo que se esperaba en cada acápite.

Desde el punto de vista contractual, las consultorías se han dado por concluidas hasta el momento que han sido incluidos todos los aspectos solicitados por la Coordinación Técnica, a partir de la revisión de las diversas versiones preliminares enviadas, según los casos.

La mayor parte de las consultorías han cumplido con estos requisitos establecidos por el proyecto regional, si bien, en algunos casos, los procesos de identificación y selección de las personas/entidades consultoras no contaron con la participación de la Coordinación Técnica del proyecto. Ello ha sido de fundamental importancia, pues, como se ha dicho, los términos de referencia de este proyecto han descansado, fundamentalmente, en la identificación de la persona/entidad idónea para cumplir en poco tiempo con la tarea a realizar, así como en la presentación de un plan de trabajo para su aprobación. La dificultad que ello ha representado en algunos casos, ha impedido que todos los Informes Nacionales cumplan con los requisitos antes enunciados, o bien, que estén presentados de acuerdo a otra estructura que la sugerida con fines de homogeneidad.

Ante esta situación, la Coordinación Técnica del Proyecto ha optado por respetar al máximo la presentación de los Informes Nacionales por parte de las entidades/personas consultoras nacionales, haciendo únicamente un trabajo de edición formal cuando así lo ha considerado necesario. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo por presentar un resumen sobre el proceso llevado a cabo en cada país, a fin de que pueda visualizarse, entre otros, el involucramiento de los diversos sectores consultados y a los que se les ha presentado el Informe.

San José, octubre de 1999.

BRASIL

RECOMENDACIONES DE KATTIA RODRIGUEZ:

1. Favor, que Ana Isabel revise MUY BIEN, CON MUCHO OJO LA INTRODUCCION METODOLOGICA y EL INDICE, PUES ALLI PONGO UNA SERIE DE ANEXOS (CORRESPONDENCIAS) QUE SIRVEN PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SOBRE EL PROCESO TAN DIFICIL QUE SE MANTUVO CON LAS BRASILEÑAS. ANA es la que determina si eso se queda así o lo omiten o bien no lo ponen completo. Cualquier cosa que me llame.

Respecto a los Anexos:

2. Anexo A: Hay que rescatar de la micro tuya, el correo que Leila Linhares le manda a AIG el 10 de mayo, con un attachment. Debe imprimirse completo.
3. Anexo B: Se refiere a la serie de correos que entre todas se mandaron. Esta en el indice ordenado cronológicamente. Solo hay que seguir ese índice. Puedes rescatarlos de la micro o bien, fotocopiarlo.

Anexo C: Es el documento previo que la Linhares hizo para una campaña VIF en Brasil. La idea de ponerlo, es evidenciarla (AIG entenderá).

Introducción Metodológica

El presente Informe fue encargado por el PNUD a la consultora nacional Leila de Andrade Linhares Barsted, quien inició la investigación en octubre de 1998 y la finalizó, con la entrega de la presente versión del Informe, en diciembre de ese mismo año.

Para la consultora, este Informe tiene el objetivo general de contribuir a visibilizar el fenómeno de la violencia doméstica y sexual contra las mujeres, así como también visibilizar la acciones del Estado brasileño en la prevención y disminución de la criminalidad y el no apoyo a las víctimas de esa violencia.

De acuerdo al reporte de la consultora, el documento presentado procura sistematizar la información sobre violencia doméstica y sexual contra las mujeres y contextualizar dicha información dentro del amplio cuadro de discriminaciones basadas en el género. Para ello, la investigación utilizó indicadores sociales e informaciones de documentos oficiales; de organismos internacionales; de las agencias del Sistema de Naciones Unidas; de organismos gubernamentales y no gubernamentales; incluyendo los datos de las delegaciones de la mujer; de trabajos académicos de investigadoras/es y demás informaciones confiables y disponibles, dentro de otros textos.

Buscando atender las demandas expresadas en los Términos de Referencia de esta consultoría, este Informe también incorpora la información presentada por la consultora Linhares para el Grupo Interagencial de Naciones Unidas y para la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, utilizado como texto base para la Campaña Nacional "Uma Vida Sem Violência é Um Direito Nosso", lanzada en Brasil el 23 de julio de 1998 y complementada con la firma del Pacto contra la Violencia Intrafamiliar, el 25 de noviembre de ese año.

Según la consultora, el Informe, en términos metodológicos, sigue las orientaciones sugeridas por el PNUD, buscando tomar datos sobre Brasil y comparándolos con los datos de otros países de la región.

Considerando las dimensiones territoriales y poblacionales de Brasil; la diversidad de sus regiones; la magnitud de las experiencias existentes en el campo de la prevención y el combate a la violencia contra la mujer; la ausencia de datos nacionales recientes y el exiguo tiempo, dentro de otros factores; se ha elaborado este Informe seleccionando datos de algunos estados brasileños, que ejemplifican la situación de violencia contra la mujer en Brasil.

En ese sentido, la consultora seleccionó los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Rio Grande del Sul, Minas Gerais, Distrito Federal y Pernambuco,

estados representativos de las regiones del sur, sureste, centro-oeste e noroeste de Brasil y considerados como estados de gran importancia por la presencia de movimientos organizados de mujeres, por su mayor o menor grado de impunidad en relación con la violencia contra la mujer., entre otros factores.

Dentro de los estados seleccionados, fueron identificados algunos servicios de apoyo a las víctimas de violencia, particularmente: las delegaciones de la mujer; los refugios; los centros de atención y de orientación jurídica; los hospitales públicos legalmente autorizados para realizar abortos por casos de embarazo resultante de estupro; los consejos estaduais de la mujer, entre otros servicios.

Los datos estadísticos sobre denuncias policiales de violencia contra la mujer no indican necesariamente, que un estado presenta mayores índices de violencia que otro. Debe considerarse, que estados que hacen anotaciones más sistemáticas sobre situaciones de violencia posibilitan una contabilización más confiable; en ese sentido se pueden presentar porcentajes de violencia contra la mujer más altos. Además, existe una disparidad entre los estados en cuanto la existencia de servicios. Por ejemplo, São Paulo que cuenta con cerca de 125 delegaciones de la mujer presenta porcentajes de violencia contra ellas, más elevados que los de Rio de Janeiro, quien cuenta con solo seis delegaciones. Por otro lado, el número de denuncias pueden ser más altas en aquellos estados donde hay un estímulo por parte del movimiento de mujeres para que las víctimas denuncien las agresiones. De esta forma, insiste la consultora, toda la información estadística disponible debe ser relativizada.

La posibilidad de evaluar la incidencia de la violencia de género en Brasil resulta difícil por la ausencia de datos estadísticos nacionales, provenientes de fuentes oficiales.

Según el reporte de la consultora sobre su metodología de trabajo, también se utilizó como fuente de datos referidos a la violencia contra las mujeres, informaciones recolectadas en reuniones, seminarios y congresos promovidos por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como los datos provenientes de las delegaciones de la mujer en los estados seleccionados, lo mismo que de las Secretarías Estaduales de Seguridad Pública, órganos del Estado a las cuales las delegaciones de la mujer están subordinadas.

Por ley, las delegaciones de la mujer no pueden investigar los homicidios o tentativas de homicidio. Eson crímenes son investigados por delegaciones policiales especializadas, cuyos registros no siempre están desagregados por sexo y cuando lo están, no indican la relación de afinidad entre la víctima y el agresor, imposibilitando la caracterización de la violencia por motivo de sexo.

Hay una incidencia relativamente baja de homicidios de mujeres, comparada con la de los hombres. Los datos utilizados sobre violencia contra la mujer, son aquellos relacionados con delitos por lesiones corporales, amenazas o estupro. Según la consultora, sí se destaca algunos homicidios contra mujeres de la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, donde se encuentra un patrón cultural muy fuerte respecto a la impunidad de los acusados por asesinatos a sus esposas, compañeras, ex-esposas o ex-compañeras.

Tal como señala Saffiotti (1997), la consultoría considera que la violencia doméstica extrapola el espacio de la residencia, teniendo en cuenta que muchas mujeres son víctimas de sus maridos y abusadas sexualmente por su pareja en el lugar de residencia. En ese sentido, el término “doméstico” significará aquel crimen cometido por una persona que priva de su intimidad a la otra persona, a través de relaciones familiares de autoridad, sean éstas cometidas en la casa de habitación de la víctima o del agresor.

Señala la consultoría que los datos de los órganos gubernamentales también deben ser analizados con cuidado y relativizados. De hecho, en casi todos los estados de la federación, en las Secretarías Estaduales de Seguridad Pública se elaboran cuadros estadísticos, pero no de manera obligatoria; en muchos casos, la información es precaria, incluso por la falta de equipo informático.

La elaboración de cuadros estadísticos por esas secretarías también se ve perjudicada porque no hay un modelo único de Registro de Denuncia para todo el país, por lo que la metodología que organiza esos instrumentos no es uniforme o dificulta una contabilización nacional y la comparación entre los estados. Esos registros no incluyen preguntas capaces de ofrecer información estadística sobre las víctimas o agresores, desagregada por sexo o raza, o cualquier otra variable que permita trazar un perfil tanto de las víctimas como de las personas agresoras.

En muchos estados, el Registro de Denuncia es elaborado por un funcionario de delegación de policía que nunca recibió entrenamiento para levantarlo. Esos registros presentan espacios en blanco o preguntas abiertas para ser llenadas por estos funcionarios que, por cuestiones burocráticas o por falta de capacitación suficiente, dejan de anotar datos que podrían fomentar información extremadamente relevante.

También la contabilización de los demás servicios dirigidos a la atención de mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo niñas y adolescentes, es precaria. A pesar de que existen 9 albergues para mujeres agredidas, no se cuenta con una evaluación del funcionamiento de la mayoría. Lo mismo puede señalarse para los servicios de atención jurídica y psicológica y de los servicios en hospitales autorizados para realizar abortos legales en caso de embarazo resultante de estupro.

Tal como otras situaciones de violencia contra la mujer, no existen estadísticas nacionales, estatales o municipales sobre acoso sexual. Por no ser considerado un delito, los datos son aún más precarios, sino inexistentes. En este sentido, señala la consultora, es urgente la organización de instrumentos de generación de datos a través de la definición de una metodología que permita su contabilización y comparación. También es fundamental estimular nuevos estudios e investigaciones de carácter local y nacional que puedan avalar la calidad y la sostenibilidad de los servicios existentes. Considerando lo anterior, la consultora señala que el Informe padece de limitaciones impuestas por la ausencia de esos instrumentos y estudios.

Finalmente, la consultora explica que, teniendo en cuenta el carácter genérico de la legislación, de las políticas, de los servicios y de los programas nacionales, no fue posible organizar la información según tipo de violencia, para no transformar el Informe en un documento repetitivo, apuntó la consultora.

Pese a que el texto del presente Informe fue entregado el 17 de diciembre de 1998 a la Coordinación General del Proyecto como a la Coordinación Técnica del mismo, ambas instancias realizaron y enviaron a la consultora en enero de 1999, observaciones al texto preliminar por cuanto era necesario precisar una serie de datos (servicios de atención, políticas y planes existentes, acciones de la sociedad civil, buenas prácticas, etc), así como ampliar otros (legislación vigente, planes sectoriales y políticas públicas impulsadas, datos) **(Consultar en adelante: Anexos A, B y C).**

Después de tres meses sin respuesta y ante el desconocimiento sobre el estado de avance y rectificación del Informe, la Coordinación Técnica del Proyecto, solicitó nuevamente el 14 de abril de 1999 al PNUD/Brasil, "el estado de conclusión del Informe".

El 26 de abril, la Coordinación Técnica recibe comunicación de la consultora quien envía el listado de personas e instituciones que actúan contra la violencia de género en los estados seleccionados para el Informe y en algunos otros estados brasileños. En esa misma comunicación, la consultora indica que *"esta es la última parte que faltaba para completar el texto de mi consultoría, enviado en diciembre de 1998"*. De esta manera, daba por finalizada la presentación del Informe, sin haber enviado las correcciones y ampliaciones de información solicitadas desde enero y en reiteradas oportunidades por la Coordinación General y la Coordinación Técnica del proyecto.

Tras un nuevo recordatorio de la Coordinación Técnica sobre este mismo punto (con fecha 29 de abril); días más tarde, el 10 de mayo, la consultora

envía sus propios señalamientos sobre las limitaciones del Informe, pero no integrados a una versión final del Informe.

Pese a siguientes solicitudes, esta vez desde el despacho de la Coordinación General del Proyecto en PNUD en Nueva York, debe señalarse que: para mediados del mes de noviembre de 1999, la Coordinación Técnica del proyecto todavía no había recibido el Informe Final con la integración de los datos y respuestas solicitadas, ni de parte de la consultora, ni tampoco de las personas responsables del avance del Informe en el PNUD o UNIFEM de Brasil.

De igual manera, valga aclarar, que durante el proceso (específicamente el 26 de febrero de 1999), la consultora señaló la imposibilidad de financiar las reuniones de consulta y validación del Informe, solicitando para tal efecto el apoyo financiero del PNUD. Frente a ello, la Coordinación Técnica secundó dicha solicitud, ya que, como ésta última lo expone en carta del 1 de marzo:

"su organización (de la reunión) se ha considerado un requisito para la aprobación definitiva del Informe Final, considerando la naturaleza delicada que tiene para cualquier país la emisión de un informe de Naciones Unidas sobre algún aspecto de su realidad nacional, sin que el mismo sea adecuadamente conocido y debatido de previo por parte de los sectores involucrados, gubernamentales y no gubernamentales. No de más está decir que su realización, sin duda, podrá enriquecer aún más el informe preliminar".

Al respecto, solo valga anotar que ni en el reporte de consultoría, ni dentro del registro de correspondencia enviada por PNUD/Brasil a la Coordinación Técnica, ha quedado consignada información específica sobre la realización de estas reuniones, por lo que se desconocen los detalles de las fechas de realización y de las personas o instituciones participantes.

Breve caracterização do país

Dados Gerais

Segundo a Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais – FLACSO (1992) o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro, na década de 80, exemplifica de forma emblemática a situação latinoamericana, face aos efeitos da crise mundial da década anterior – alta dívida externa e retração do desenvolvimento econômico.

A esse processo, comum a todos os países do continente, o Brasil teve como agravante a existência de um histórico e forte processo de concentração de renda, que gerou níveis altíssimos de desigualdade social, preocupantes indicadores sociais relativos à baixa cobertura do sistema de saúde e altas taxas de mortalidade infantil e materna; níveis altos de analfabetismo; aceleração sem planejamento adequado do processo de migração urbana. A visibilidade desse quadro, vivenciado pela grande maioria da população, foi obstaculizada no período da ditadura militar, de 1964 a 1979. Assim, somente com a redemocratização do país, na década de 80, a partir da difusão dos dados estatísticos coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, tais processos passaram a ter visibilidade e debate social.

A redemocratização do país, na década de 80, assumiu o compromisso com o restabelecimento do Estado de Direito e com a redução das desigualdades sociais. No entanto, os dados estatísticos oficiais vêm apontando para um quadro ainda grave de desigualdades sociais, com discriminações específicas relativas à situação das mulheres e da população negra.

O Relatório sobre Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado pelo PNUD/IPEA (1996), ressalta que o Brasil, no início da década de 90, registrava um dos maiores graus de desigualdade no mundo. Enquanto para a grande maioria dos países a renda de um indivíduo do grupo dos 10% mais ricos é, em média, até dez vezes maior do que um indivíduo do grupo dos 40% mais pobres, no Brasil, esse parâmetro é infinitamente mais injusto – a renda média dos 10% mais ricos é quase 30 vezes maior que a renda média dos 40% mais pobresⁱ.

Diferenciais de Renda: sexo e cor

Dados dessa mesma fonte indicam que o crescimento da economia brasileira não beneficiou igualmente todos os grupos, fenômeno que ocasionou um aumento no grau da desigualdade social. Segundo o Relatório, estima-se que, no Brasil, em 1990, existiam 42 milhões de pobres, o que representa 30% da população. As desigualdades sociais são acrescidas de fatores que interferem sobre o poder de barganha dos indivíduos e que explicam a existência de diferenciação de salários. Dentre esses fatores estão determinadas características tais como gênero e raça. O Relatório indica que esse fenômeno faz com que trabalhadores idênticos, do ponto de vista da produtividade, recebam remunerações diferentes por apresentarem uma dessas características. Assim, em 1990, as mulheres trabalhadoras ganhavam, em média, 63% dos salários masculinos. As mulheres chefes de família enfrentam situação mais adversa, porque tais famílias têm uma grande chance de ser monoparentais. No estado de São Paulo 66% das famílias chefiadas por mulheres eram monoparentais, sendo que essa proporção atingia a 80% nos casos das famílias chefiadas por mulheres negras e pardas.

Dados relativos a 1989 indicam que as famílias chefiadas por mulheres com filhos menores de 14 anos perfaziam 58% das famílias vivendo com até meio salário mínimo de rendimento mensal per capita. A cifra correspondente para famílias compostas de casal e filhos era de 33%.

QUADRO I
Diferenciais de renda entre as populações preta e parda
e a população branca , segundo o sexo– 1990
 Renda média dos brancos = 100

| Renda | Homens | Homens | Mulheres | Mulheres |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|
| | Pretos | Pardos | Pretas | Pardas |
| Diferencial bruto | 63 | 68 | 68 | 68 |
| Diferencial líquido(1) | 74 | 79 | 86 | 82 |

(1) Corrigido para diferenças regionais e de nível educacional.
 Adotado o conceito de que pertencem à cor negra, o conjunto de pessoas que se declararam pretas e pardas, os negros constituem 44,2% da população brasileira.
 Fonte: Barros, Mendonça e Velasco, 1996.

Educação

O Relatório do PNUD/IPEA (1996) mostra que o perfil da educação no Brasil apresentou melhoria significativa na duas últimas décadas, com redução da taxa de analfabetismo, aumento do número de matrículas em todos os níveis de ensino e crescimento da escolaridade média da população. Apesar disso, o Brasil encontra-se, ainda, cerca de dois anos de estudo abaixo do que seria de se esperar para um país com sua renda per capita. O gasto com educação apresentou crescimento expressivo na segunda metade da década

de 80, alcançando 3,6% no final da década. Contudo, esse quadro favorável não possibilitou a melhoria da qualidade do ensino básico no Brasil.

Saúde

O referido Relatório sobre Desenvolvimento Humano no Brasil chama atenção para a diminuição da mortalidade infantil que declinou de 163/1.000, em 1940, para 87/1.000, em 1980. Também as taxas de mortalidade materna se reduziram, embora permaneçam em patamares elevados: 124 óbito maternos para cada 100.000 nascidos vivos, em 1989. As mortes decorrentes de abortos provocados em condições adversas à saúde correspondem à 12% dos óbitos.

Ainda na área da saúde, a partir da década de 80, aumentou o número de hospitais, ambulatórios e leitos. O total de hospitais públicos aumentou, entre 1980 e 1989, de 1.200 para 2.000, representando um crescimento de 61%. No final da década de 80, o número de hospitais existentes era de cerca de 7.200, embora o setor privado detenha a hegemonia desses estabelecimentos. Para a década de 90, estimava-se um aumento da presença do setor privado. Dados de 1989, indicam que havia no Brasil 3,7 leitos hospitalares por 1.000 habitantes. A relação médico/ paciente ,em 1991, era, em média, de 1 médico para 641 habitantes. Em regiões mais pobres do país essa relação era de 1/1.174. O gastos totais com saúde, em 1989, foram de 3,1% do PIB.

Trabalho, Chefia Familiar e outros indicadores sociais desagregados por sexo

Para este informe, conforme solicitado, destacamos nos Quadros II, III e IV alguns indicadores sociais, desagregados por sexo e, quando possível, apresentamos, também, alguns indicadores desagregados por raça, sempre que possível.

QUADRO II
Indicadores Sociais, Desagregados Por Sexo

| BRASIL | Fonte/ Ano | Homens | Mulheres | TOTAL |
|---|---------------|------------|----------------|-------------|
| 1. POPULAÇÃO TOTAL | Censo de 1996 | | | 157.079.573 |
| Taxa de crescimento anual da população | PNAD 1996 | | | 1,4% |
| Taxa de urbanização | PNAD 1996 | | | 78,4% |
| Taxa de fecundidade | PNAD 1996 | | | 2,28 |
| 2. SAÚDE | | | | |
| Esperança de vida ao nascer | PNAD 1996 | 63,9 anos | 71,4 anos | |
| Taxa de mortalidade infantil | PNAD 1996 | 48/1.000 | 36/1.000 | 37,5/1.000 |
| Taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos | PNAD 1996 | 65,5/1.000 | 56/1.000 | 60,7/1.000 |
| Mortalidade materna | PNAD 1989 | | 124/100.000 | |
| Uso de anticoncepcionais entre mulheres de 15 a 49 anos que vivem em unio – 1996 Esterilização Pílula | BENFAM 1996 | 2,4% | 40,1% 20,7% | |
| 3. EDUCAÇÃO | | | | |
| Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais | PNAD 1996 | 14,5% | 14,8% | |
| Média de anos de estudos das pessoas de 10 anos ou mais de idade | PNAD 1996 | 5,2 anos | 5,4 anos | 5,3 anos |
| Taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos | PNAD 1996 | 90,6% | 91,8% | 91,2% |

| BRASIL | Fonte/ Ano | Homens | Mulheres | TOTAL |
|--|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| 4. TRABALHO | | | | |
| População Economicamente Ativa /PEA | PNAD 1996 | 60% | 40% | |
| Taxa de atividade por pessoa de 15 a 65 anos | PNAD 1996 | 85,5% | 54,9% | 69,7 total PEA |
| Chefia familiar | PNAD 1996 | 75,8% | 24,2% | |
| Taxa de desocupação | PNAD 1996 | 5,7% | 8,8% | 6,9% |
| 5. RENDA | | | | |
| PIB per capita em US\$ pessoas acima de 10 anos | PNAD 1996 | | | US\$5.037,13 ou R\$5.430,03 =R\$290,00 rendimento médio mensal |
| Rendimento médio mensal nominal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por antigas Grandes Regiões | PNAD 1996 | R\$415,00 | R\$173,00 | |
| Diferencial de renda em relação aos homens 1996 | PNUD/IPE A 1996 | | 63% dos salários masculinos | |
| 6. SANEAMENTO | | | | |
| Domicílios com água tratada | PNAD 1996 | | | 74,2% (*) |
| Lixo coletado | Pnad 1996 | | | 87,4% (*) |
| Esgoto | PNAD 1996 | | | 63,6% (*) |
| Luz Elétrica | PNAD 1996 | | | 92,9% (*) |

(*) Não incluiu área rural de Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, Pará e Amazonas.

QUADRO III
Indicadores Sociais, por por raça

| Indicador | Branços | Negros/pardos |
|---|----------------|----------------------|
| Distribuição da População | 55,2% | 44,2% |
| Mortalidade infantil | 37,3/1.000 | 62,3/1.000 |
| Mortalidade de menores de 05 anos | 45,7/1.000 | 76,1/1.000 |
| Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais | 6,2 anos | 4,2 anos |
| Domicílios por condições de saneamento segundo a cor do chefe: água tratada | 81% | 64,7% |
| Domicílios por condições de saneamento segundo a cor do chefe: esgoto | 73,6% | 49,7% |

Os dados sobre participação política

A participação na vida política nacional através do voto popular é garantida na Constituição Federal para homens e mulheres, a partir dos 16 anos (optativo) ou a partir dos 18 anos (obrigatória), incluindo as pessoas analfabetas. As mulheres constituem-se em mais da metade dos eleitores e, no entanto, sua representação nos Poderes Executivo e Legislativo é extremamente baixa, não diferendo da maioria dos países.

No Brasil, as eleições de 1994 apresentaram, comparativamente, melhores resultados para as mulheres do que as eleições de 1990. Mesmo assim, na Câmara dos Deputados a participação das mulheres não ultrapassa 7,6% dos parlamentares e, no Senado, só alcança 7,41%ⁱⁱ dos senadores. Essa baixa representação política reflete-se no Poder Executivo, em todos os níveis. Poucas foram as mulheres ministras de Estado. Somente em 1994 uma mulher foi eleita governadora, do total de cerca de cinco mil municípios brasileiros. Nas eleições de 1992 foram eleitas apenas 178 mulheres prefeitas. Há apenas um ministro de Estado do sexo feminino.

Rufino (1997) assinala que, em 1994, dentre 32 mulheres deputadas federais, não havia nenhuma mulher negra enquanto no Senado, no mesmo ano, das três únicas mulheres senadoras duas eram mulheres negras.

Também na alta esfera do Poder Judiciário Federal a mulher está ausente, em que pese sua participação expressiva, através de concursos públicos, no judiciário de primeira instância, bem como sua crescente presença em outras instituições jurídicas como a Defensoria Pública e o Ministério Público. Só o Superior Tribunal do Trabalho - TRT tem uma juíza mulher indicada como representante classista. Na Justiça Federal de 1º e 2º Graus a

representação feminina é de 152 juízas para 451 juízes, o que significa 25,05% de presença feminina.

Pesquisa coordenada por Valdés e realizada pela ONG CEPIA (1992) mostrou que não apenas o Estado, mas a sociedade civil também discrimina as mulheres. Nas grandes corporações de empresários, como a FIESP e a FIRJAN, nunca foi eleita uma mulher para a Presidência. Da mesma forma, nunca uma mulher ocupou a presidência da Associação Brasileira de Imprensa - ABI ou do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Ressalte-se que, apesar dessa falta de representatividade nos cargos de poder dessas entidades, grande parte do contingente de profissionais da imprensa e da advocacia é formado por mulheres.

O Quadro abaixo resume a posição da mulher brasileira nas esferas de poder.

QUADRO IV
Representação da Mulher nas Esferas de Poder

| INDICADORES | SITUAÇÃO |
|--|--|
| Representação / Cúpula Poder Judiciário – 1998 | 1 Ministro Classista |
| Representação /Executivo Federal – 1998 | 1 ministro |
| Representação Câmara dos Deputados – 1998 | 7,6% |
| Representação Senado Federal – 1998 | 7,41% |
| Representação no Executivo Municipal – 1996 | 178 mulheres prefeitas, no total de cinco mil municípios |

Fonte:Câmara dos Deputados, 1997.

Definição conceitual de violência de gênero contra as mulheres e alcances nacionais de sua aplicação: marco normativo vigente e âmbito das ações que se desenvolvem.

Neste Informe adota-se a definição da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 1994, coerente com Declaração sobre a Violência Contra a Mulher, da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 1993.

Esta Convenção legitima todo o debate do movimento de mulheres no Brasil sobre a necessidade de considerar esse tipo de violência objeto de políticas públicas. Nesse sentido, formalmente, os serviços criados, antes e depois da assinatura desta Convenção pelo Estado Brasileiro, devem se orientar pelo posicionamento teórico-conceitual expresso na definição de que entender-se-á como violência contra a mulher

“...qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”.

“...a violência contra a mulher incluiu a violência física, sexual e psicológica: a) que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; b) que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimento de saúde ou qualquer outro lugar e que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra”.

Conceitualmente, a violência contra as mulheres e meninas faz parte de um contexto sócio-econômico e cultural que, historicamente, discrimina o sexo feminino. A manutenção dessas discriminações tem como consequência um conjunto de situações desvantajosas para as mulheres que reforçam e são reforçadas por práticas de violência física, sexual e psicológica. Nesse sentido, a violência contra as mulheres tem fundamentos estruturais.

Incorpora-se, dessa forma, as disposições da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1975, que deu alento ao moderno movimento feminista no Brasil definindo que

“(...) a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e

da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”

“(...) a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade”.

Também os Planos de Ação das Conferências do Cairo (1994) e de Beijing (1995) são fundamentos formais das ações voltadas para o apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual.

A Convenção Interamericana, de 1994, e a Convenção pela Eliminação da discriminação contra a mulher, de 1975, dentre outros Tratados e Convenções internacionais encontram receptividade na Constituição Federal do Brasil que:

em seu artigo 4º reconhece que a República Federativa brasileira rege-se por um conjunto de princípios, dentre os quais o da prevalência dos direitos humanos; em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais e coletivas, assegura, no §2º, que os “direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes (...) dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

O direito internacional oriundo de tratados em convenções internacionais assinados pelo Estado Brasileiro e ratificados internamente pelo Congresso Nacional têm força de lei interna, incidindo sobre todo o território nacional, com status constitucional. Os Planos de Ação das Conferências das Nações Unidas não têm força de lei interna mas podem ser considerados princípios gerais do direito internacional sobre direitos humanos e, nesse sentido, podem ser usados pelo Judiciário brasileiro na interpretação da lei nacional. O Quadro V assinala alguns dos tratados e convenções assinados internacionalmente e reconhecidos, internamente, pelo Estado brasileiro.

QUADRO V
Principais Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos
Ratificados pelo Brasil

| Ano de aprovação pela ONU | Ano de ratificação pelo Brasil | Instrumento Internacional |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1945 | 1945 | Carta das Nações Unidas |
| 1948 | 1948 | Convenção contra o Genocídio |
| 1966 | 1992 | Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos |
| 1966 | 1992 | Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais |
| 1965 | 1968 | Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial |
| 1979 | 1984 ⁽¹⁾ / 1994 | Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher |
| 1984 | 1989 | Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes |
| 1989 | 1990 | Convenção Sobre os Direitos da Criança |
| 1994 | 1995 | Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) |

Fonte: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 1997. Nota: (1) Assinada com reservas, em 1984, esta Convenção foi totalmente ratificada pelo Brasil Em 1994.

É fundamental incluir no marco conceitual do debate sobre a violência doméstica e sexual contra as mulheres a perspectiva introduzida pelo movimento feminista brasileiro a partir da década de 70.

Desde meados desta década, a luta contra essa violência tem sido uma questão prioritária para os movimentos de mulheres no Brasil. Surgido em pleno processo de ditadura militar, época em que a violência do Estado se impunha a toda a sociedade, o movimento feminista deflagrou uma série de denúncias sobre a ocorrência desse tipo de violência no conjunto das

discriminações baseadas no sexo, chamando atenção de toda a sociedade para a violência específica contra a mulher, incluindo os atos de violência física e sexual, praticados não apenas no espaço público mas, também, no espaço doméstico.

O assassinato de mulheres da alta classe média, em fins da década de 70, deu visibilidade, através da mídia, a uma ocorrência banalizada pelos costumes e pelas mentalidades – o assassinato de mulheres por seus maridos e a impunidade desses agressores. Mesmo organizado ainda de forma incipiente, o movimento feminista foi capaz de se mobilizar para denunciar a violência doméstica e rejeitar a tese da “legítima defesa da honra” aceita pelo júri popular para absolver os réus dos assassinatos de mulheres.

As denúncias das discriminações contra as mulheres foram reforçadas por alguns fatores. Internacionalmente, a assinatura, pelo Estado brasileiro, da Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, aprovada pelas Nações Unidas em 1979, deu o respaldo necessário para o reconhecimento da existência de discriminações de direito e de fato existentes no Brasil e para a legitimidade do movimento feminista ao denunciar essa violência.

Internamente, o envolvimento das feministas na luta pela redemocratização do país permitiu que o movimento de mulheres passasse a ser tratado como interlocutor legítimo por outros setores sociais comprometidos com o processo de abertura democrática e de ampliação da cidadania.

Também a partir da década de 70, em todo o mundo, ocorreu um considerável esforço teórico, realizado principalmente por mulheres, para entender a discriminação baseada no sexo. Despontaram os chamados “estudos sobre as mulheres” que alimentaram e foram alimentados pelo movimento feminista. Esses estudos permitiram uma maior visibilidade da problemática das mulheres, incentivando, inclusive, a produção de indicadores estatísticos desagregados por sexo, fundamentais para a construção de estratégias de mobilização política em torno de uma pauta de reivindicações extremamente vasta e complexa das mulheres. Através do diálogo de pesquisadoras feministas com a instância governamental responsável pelo Censo Demográfico – IBGE, foi possível incluir, já no censo de 1980, metodologia que recuperasse dados e elaborasse os indicadores sociais desagregados por sexo.

A partir da década de 80 passam a ser realizados no Brasil estudos teóricos que incorporam a perspectiva relacional entre os sexos. São os chamados “estudos de gênero” que incentivaram a interdisciplinaridade, enfatizando a necessidade de análises sobre o cultural e o simbólico. Pensar a partir de uma perspectiva de gênero permite compreender como a construção cultural das diferenças entre homens e mulheres forjaram uma distribuição desigual de poder e geraram subalternidades. Gênero, como categoria relacional, permite, através da comparabilidade, identificar, medir e analisar as

vivências diferenciadas de homens e mulheres, orientando políticas capazes de eliminar e estabelecer parâmetros de equidade.

A interpretação, à luz da categoria gênero, dos dados sobre violência evidencia a especificidade da violência contra a mulher. Embora os dados indiquem que são os homens as maiores vítimas da violência em geral, a violência que recai sobre as mulheres aponta para um espaço próprio de ocorrência – o lar – e para agentes agressores específicos – maridos e/ou companheiros.

Incidência e prevalência da violência de gênero contra as mulheres no país nos seguintes estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais

Dados Gerais sobre a violência doméstica e sexual contra a mulher no Brasil

A única pesquisa nacional sobre violência no País, elaborada através de metodologia que permite comparabilidade, foi produzida em 1988 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - no âmbito da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar –PNAD, realizada anualmente, que incluiu um Suplemento sobre Justiça e Vitimização. Esse Suplemento apresentou as primeiras estatísticas nacionais, desagregadas por sexo, sobre casos de lesões corporais e crimes patrimoniais denunciados à polícia pelas vítimas. No conjunto das vítimas de agressões físicas (lesões corporais), cerca 44,77% eram mulheres. As grandes diferenças entre vítimas mulheres e vítimas homens desse tipo de crime diziam respeito ao autor e ao local de ocorrência da agressão. Para as mulheres, 63% das agressões foram majoritariamente praticadas por parentes e conhecidos, na maioria homens do círculo afetivo da vítima. Quanto ao local da agressão, em 55% dos casos a violência ocorreu dentro de casa. As 83% das agressões contra os homens foram praticadas na rua, majoritariamente por conhecidos e estranhos, e apenas 17% na residência. Tal pesquisa demonstrou o peso do diferencial de gênero na ocorrência do fenômeno da violência, reforçando as denúncias que o movimento feminista vinha fazendo desde meados da década de 70.

Em 1991, a Câmara dos Deputados instituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a violência contra a mulher. Esta Comissão divulgou pesquisa feita de janeiro de 1991 a agosto de 1992 apresentando um quadro de distribuição por tipo de violência registrada contra a mulher no País, onde destacam-se os crimes de lesão corporal, ameaças e estupro como os mais recorrentes.

QUADRO VI
Dados da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre violência contra a Mulher
1991-1992

| Tipo de crime cometido contra a mulher | Representatividade no conjunto da criminalidade contra a mulher |
|---|--|
| Lesão corporal | 26,2% |
| Ameaças | 14,4% |
| Estupro | 1,8% |
| Homicídios | 0,5% |

| | |
|--------|-----|
| Outros | 60% |
|--------|-----|

Fonte: Relatório da CPI da violência contra a mulher, 1993.

Na ausência de dados estatísticos nacionais oficiais sistematizados e mais atualizados, os únicos dados existentes são oriundos de organizações não-governamentais ou das Secretarias de Segurança Pública dos estados brasileiros.

Assim, em 1998, a organização não-governamental Movimento Nacional de Direitos Humanos, visando suprir a falta de dados sobre homicídios praticados no Brasil, com desagregação por sexo, realizou uma pesquisa que contabilizou os casos divulgados pela imprensa, em 17 Estados brasileirosⁱⁱⁱ.

Os Quadros VII, VIII e IX apresentam algumas informações importantes, dessa Pesquisa, indicando, dentre outros aspectos, que os homens são as maiores vítimas dos homicídios. No entanto, sob a forma de lesões corporais a violência se distribuiu praticamente de igual forma para ambos os sexos. Além disso, destacam que a vitimização feminina nas faixas etárias mais precoces e mais idosas é mais alta que aquela dos homens. Reafirmam os dados do IBGE, de 1988, ao constarem que as mulheres, mais que os homens, são vítimas de violência intrafamiliar.

QUADRO VII
Vítimas de Homicídios no Brasil Distribuição por Sexo

| Ano | Vítimas | |
|------|---------|----------|
| | Homens | Mulheres |
| 1995 | 90,2 % | 9,8 % |
| 1996 | 89,8 % | 10,2 % |

Fonte: Banco de Dados do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 1998.

QUADRO VIII
Relação de Afinidade entre Vítima de homicídio e Acusado

| Ano | Relacionamento Familiar Ou De Amizade Com O Acusado | |
|------|---|--------------|
| | VÍTIMA MULHER | VÍTIMA HOMEM |
| 1995 | 66,04% | 35,60% |

1996

72,28%

39,34%

Fonte: Banco de Dados do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 1998.

Esse Quadro reafirma dados das Delegacias da Mulher do Rio de Janeiro para 1992 quanto à reincidência de agressões sofridas pela mulher, segundo o grau de afinidade com o agressor.

QUADRO IX
Agressões anteriores segundo grau de afinidade vítima-agressor
1992

| Agressões anteriores | Parente, vizinho, outros | Marido, companheiro ou ex | Total |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Houve | 31 | 230 | 261 |
| Não houve | 41 | 62 | 103 |
| Total | 72 | 292 | 364 |

Fonte: SORES, Luiz Eduardo, SOARES, Bárbara M. e CARNEIRO, Leandro, 1996.

QUADRO X
Idade e Gênero da Violência Vítimas de Homicídios
(1996)

| Vítima | Até 11 Anos | 12 A 17 | 18 A 21 | 22 A 35 | 36 A 49 | Mais De 50 | Não Consta A Idade |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Mulher | 7,70 % | 13,45 % | 13,23 % | 35,13 % | 18,09 % | 12,11 % | 7,75 % |
| Homem | 1,55 % | 8,38 % | 16,22 % | 47,80 % | 17,98 % | 8,94 % | 13,90 % |

Fonte: Banco de Dados do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 1998.

Este último Quadro comprova a existência de taxas de homicídios contra crianças e adolescentes do sexo feminino na faixa de 0 a 17 anos mais altas que para crianças e adolescentes do sexo masculino. O mesmo fenômeno se

verifica nas faixas etárias acima de 36 anos, quando as mulheres também são vítimas de homicídio em maior número que os homens.

A grande incidência de homicídios para os homens situa-se na faixa etária de 18 a 35 anos. Junto com os acidentes, os homicídios são a primeira causa de morte masculina no Brasil.

Serviços existentes para atendimento às mulheres vítimas de violência

Em relação aos serviços de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sexual, estima-se que há em todo o País cerca de 255 delegacias da mulher. Uma avaliação sobre a qualidade do serviço de atendimento dessas delegacias ou dos recursos humanos e materiais ainda está por ser feita^{iv}.

Escolhemos alguns estados brasileiros que apresentam dados, ainda que parciais, sobre violência desagregados por sexo para exemplificar a incidência da violência contra a mulher por motivo de sexo, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco, representativos das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. Os dados existentes, mais adiante serão apresentados, organizados em Quadros, nem sempre passíveis de comparabilidade entre os estados selecionados para este Informe.

Além das Delegacias da mulher, de forma resumida, pode-se apontar que três governos estaduais – Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, fornecem serviços de atendimento legal gratuito através da Defensoria Pública ou da Procuradoria do Estado, órgãos subordinados ao Poder Executivo estadual. Em alguns municípios, serviços foram criados com o apoio das prefeituras locais ou em convênio entre prefeitura e governo de estado. Assim, existem alguns núcleos de atendimento à mulher, como é o caso do Rio de Janeiro, que conta com 05 Núcleos Integrados de Atendimento à Mulher Vítima de Violência – NIAM, apoiados, também, por organizações não-governamentais ou por grupos autônomos de mulheres. Esses Núcleos, em geral, encaminham as vítimas para serviços de apoio legal, governamental, ou para atendimento psico-social que pode ser feito tanto por agentes do estado como por entidades não-governamentais.

No conjunto dos cerca de 5.500 municípios brasileiros, as experiências são restritas e variadas, incluindo 13 hospitais que realizam o abortamento legal em casos de gravidez resultante de estupro, localizados nos municípios de São Paulo, Campinas (SP), Rio de Janeiro, Recife (Pernambuco), Fortaleza (Ceará), Belém (Pará) e Distrito Federal e 09 abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Em 1998, através de Protocolos assinados entre prefeituras de diversos municípios e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, foram destinados pelo governo federal R\$480.000,00 para a

criação de mais 09 abrigos. Espera-se, assim, que no início de 1999, estejam em funcionamento cerca de 18 abrigos para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou, em 18 de novembro de 1998, uma emenda para manutenção e instalação de casas abrigo para mulheres vítimas de violência no valor de 18 milhões de reais, a ser apreciada na votação pelo Congresso Nacional do Orçamento da União para 1999 .

Dada a magnitude do país e as necessidades das mulheres vítimas de violência, esses serviços são exíguos. Muitos deles, por outro lado, apesar de funcionarem com poucos recursos, prestam inestimável apoio às mulheres; outros, em menor número, não conseguem atingir os objetivos pretendidos seja pela falta de recursos materiais e humanos, seja pela falta de capacitação de seus funcionários.

Além desses serviços, em diversos estados e municípios brasileiros, outros serviços têm sido organizados e ofertados às mulheres, conforme síntese apresentada no Quadro XI.

QUADRO XI
Síntese Dos Serviços Existentes De Apoio À Mulher Vítima De Violência
Doméstica E Sexual Em 06 Estados Brasileiros

| Serviços | R.J | S.P | D.F. | PE | RG |
|---|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Delegacias | 06 | 125(*) | 01 | 02 | 03 |
| Abrigos | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| Atendimento Legal | 05 | 02 | - | - | - |
| Atendimetno Psicológico | 03 | 02 | 01 | - | - |
| Serviços de Aborto legal | 02 | 03 | 01 | 01 | - |
| Disque Denúncia | - | - | 01 | | - |
| Núcleos e Centros de Apoio à Mulher | 05 | - | - | - | - |
| Programas de combate à violência contra a mulher | 02 | 05 | - | - | 02 |
| Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (*) | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |

Fontes: Delegacias da mulher dos estados selecionados, Coordenadoria das Delegacias da mulher do Rio de Janeiro, Coordenadoria das Delegacias da Mulher de São Paulo, Boletim do CFEMEA (ONG), boletins de outras organizações não-governamentais, informações obtidas no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro.

(*) Os Conselhos Estaduais apesar de não necessariamente prestarem serviços específicos às mulheres vítimas de violência são pontos de referência para muitas dessas mulheres que neste espaços governamental recebem orientações e são encaminhadas aos serviços específicos.

Magnitude da Violência doméstica e sexual contra as mulheres nos estados selecionados

Dados das Secretarias de Segurança Pública dos estados mencionados apresentam a magnitude das ocorrências mais comuns de violência contra a mulher – lesões corporais, ameaças e estupro. Como não há um uniformização dos dados disponíveis, estes são apresentados, mais ou menos, organizados por cada estado, conforme as informações recebidas das diversas Delegacias da Mulher contactadas. Convém destacar que as delegacias da mulher, como já referido na Metodologia, não investigam, por força de lei, as ocorrências de homicídios e tentativas de homicídios. Assim, a pesquisa mencionada do Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma fonte preciosa de dados sobre essas ocorrências.

QUADRO XII
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Rio De Janeiro

| Tipos | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998(**) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 21.082 | 23.625 | 25.459 | 28.110 | 31.206 |
| Estupro | 2.131 | 1.328 | 1.290 | 1.544 | 884 |
| Ameaças | 7.327 | 9.391 | 11.296 | 13.936 | 17.189 |
| Total | 30.540 | 34.344 | 38.045 | 43.590 | 49.279 |

(*) O estado do Rio de Janeiro tem 06 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher vítima de violência. Os dados apresentados são relativos a todas as delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro, incluindo as ocorrências registradas nestas Delegacias.

(**) Até o mês de julho de 1998.

QUADRO XIII
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Somente Relativos Às Delegacias Da Mulher Do Rio De Janeiro

| Tipos | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998(**) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 5.151 | 5.791 | 6.264 | 7.153 | 4.886 |
| Estupro | 209 | 235 | 228 | 257 | 171 |
| Ameaças | 1.415 | 1.515 | 2.211 | 3.072 | 3.150 |
| TOTAL | 6.775 | 7.541 | 8.703 | 10.482 | 8.207 |

(*) Dados exclusivos de 06 Delegacias de Atendimento à Mulher.

(**) Até o mês de julho de 1998.

QUADRO XIV
Dados Estatísticos Sobre Violência Doméstica E Sexual
Contra A Mulher(*) São Paulo

| Tipos | 1996 | 1997 | 1998(**) |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 41.003 | 51.940 | 27.546 |
| Estupro | 1.953 | 1.873 | 947 |
| Ameaças | 22.856 | 32.871 | 17.819 |
| Total | 65.812 | 86.684 | 46.312 |

(*) O estado de São Paulo tem 125 delegacias de defesa da mulher. Os dados apresentados incluem as ocorrências registradas somente nestas Delegacias.

(**) Dados relativos ao primeiro semestre.

QUADRO XV
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Rio Grande Do Sul

| Tipos | 1994 | 1995 | 1996 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lesão corporal dolosa | 25.975 | 27.756 | 29.881 |
| Estupro | 1.320 | 1.321 | 1.267 |
| Ameaças | 18.927 | 20.668 | 25.051 |
| TOTAL | 46.222 | 49.745 | 56.199 |

(*) O estado do Rio Grande do Sul tem 02 delegacias de atendimento à mulher. Os dados apresentados representam o conjunto das ocorrências registradas em todas as delegacias do estado, incluindo as delegacias da mulher.

Fonte: Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, 1996.

QUADRO XVI
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

| Tipos | 1996 | 1997 | 1998(**) |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 1.519 | 1.340 | 1.194 |
| Estupro | 35 | 52 | 32 |
| Ameaças | 1.606 | 1.463 | 1.222 |
| TOTAL | 3.160 | 2.855 | 2.448 |

(*) Dados relativos somente à delegacia da mulher de Porto Alegre.

A Delegacia da Mulher de Porto Alegre apresentou para os crimes de lesão corporal, estupro e ameaças informações desde 1988, resumidas no Quadro XVII.
Fonte: Delegacia de Polícia para a Mulher de Porto Alegre.

QUADRO XVII

Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*) Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

Abril de 1988 a Abril de 1998
Delegacias da Mulher

| Delito | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | TOTAL |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Lesão Corporal | 1.166 | 1.182 | 1.297 | 1.471 | 1.263 | 1.336 | 1.478 | 1.310 | 1.519 | 1.340 | 485 | 13.847 |
| Ameaça | 762 | 931 | 1.183 | 1.550 | 1.293 | 1.111 | 1.421 | 1.584 | 1.606 | 1.463 | 530 | 13.434 |
| Estupro | 46 | 43 | 54 | 67 | 56 | 46 | 52 | 51 | 35 | 52 | 17 | 519 |
| TOTAL | 1.974 | 2.156 | 2.534 | 3.088 | 2.612 | 2.493 | 2.951 | 2.945 | 3.160 | 2.855 | 1.032 | 27.800 |

O total das ocorrências registradas nas delegacias da mulher neste período totalizam 57.473 casos. Nesse sentido, os crimes de lesão corporal, ameaça e estupro significam mais de 50% desse total.

Fonte: Delegacia de Polícia da Mulher de Porto Alegre.

QUADRO XVIII
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Distrito Federal

| Tipos | 1998(**) |
|-----------------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 983 |
| Estupro | 103 |
| Ameaças | 972 |
| | |

(*) O Distrito Federal tem 01 delegacia de defesa da mulher. Os dados apresentados incluem as ocorrências registradas nesta Delegacia.

(**)Dados relativos ao período de janeiro a setembro de 1998.

Fonte: Delegacia da Mulher do D.F.

QUADRO XIX
Dados Estatísticos Sobre Homicídios Contra A Mulher(*)
Pernambuco

| Tipos | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Homicídios | 73 | 92 | 84 | 89 | 101 | 439 |

(*) Este estado tem 02 delegacias da mulher.

Fonte: Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP.

Segundo o GAJOP, para o ano de 1998, cerca de 77% dos autores destes homicídios contra a mulher não foram identificados.

A Delegacia da Mulher, da cidade de Recife, no ano de 1998, de janeiro até 10 de dezembro, registrou 4.134 ocorrências de crimes contra as mulheres.

Dados do período de janeiro a outubro de 1998, fornecidos pelo Ministério Público do estado de Pernambuco, relativos às denúncias oferecidas em casos ocorrência de crimes, indicam que do total das vítimas 31,4% são mulheres. Dentre estas 12,9% estavam na faixa etária de 0 a 12 anos; 23,7% na faixa etária de 21 a 30 anos; 22,6% na faixa etária de 30 a 40 anos. Do total das ocorrências contra as mulheres, 30,4% diziam respeito a crimes de homicídio e lesões corporais. Segundo essa mesma fonte, do total dos crimes contra as mulheres 8,8% eram estupros.

QUADRO XX
Dados Estatísticos Sobre Violência Contra A Mulher(*)
Minas Gerais

| Tipos | 1998(**) |
|-----------------------|-----------------|
| Lesão corporal dolosa | 2.296 |
| Estupro | 410 |
| Ameaças | 1.573 |
| Total | 4.279 |

(*) O estado de Minas Gerais possui 04 delegacias de defesa da mulher. Os dados para 1998 dizem respeito às ocorrências registradas somente na Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, de janeiro a novembro de 1998.

Fonte: Delegacia da Mulher de Belo Horizonte.

QUADRO XXI
Registros De Ocorrências De Crimes Contra A Mulher- 1996
Resumo Dos Dados Gerais Dos Estados Do
Rio De Janeiro E Rio Grande Do Sul

| Crimes | RJ | RG | TOTAL |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Lesão corporal | 25.459 | 29.881 | 55.340 |
| Ameaças | 11.296 | 25.051 | 36.347 |
| Estupros | 1.290 | 1.267 | 2.557 |
| Total | 38.045 | 56.199 | 94.244 |

QUADRO XXII
Registro De Ocorrências De Crimes Contra A Mulher - 1998
Resumo Dos Dados Das Delegacias Da Mulher Dos Estados Seleccionados

| Crimes | RJ | SP | RG | D.F. | MG | Total |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Lesão Corporal | 4.886 | 27.546 | 1.194 | 983 | 2.296 | 36.905 |
| Ameaças | 3.150 | 17.819 | 1.222 | 972 | 1.573 | 24.736 |
| Estupros | 171 | 947 | 32 | 103 | 410 | 1.663 |
| Total | 8.207 | 46.312 | 2.448 | 2.058 | 4.279 | 63.304 |

Pesquisas locais, como a realizada em São Paulo sob a Coordenação da Professora Sílvia Pimentel⁹, demonstram outras características da violência contra a mulher. Tal pesquisa analisou um conjunto de 150 casos de violência sexual concluindo que a maioria absoluta dos estupros foi praticada por parentes ou pessoas próximas da vítima, às vezes, por anos seguidos. A maior parte dos estupradores não possuía antecedentes criminais e não demonstrava culpa durante o julgamento. As vítimas

mais freqüentes foram meninas em idade escolar.

Essa pesquisa contribuiu para desfazer a idéia de que o estupro só é cometido por desconhecidos ou sob efeito de drogas. Do conjunto dos agressores, apenas 28% dos acusados estavam embriagados ou drogados.

Dados relativos ao ano de 1992, divulgados no documento do Grupo Parlamentário Interamericano sobre Población y Desarrollo^{vi} demonstram que, no Brasil, entre janeiro de 1991 e agosto de 1992, foram registradas 205.219 agressões nas Delegacias de Mulheres em todo o país. Segundo esses dados, os crimes mais freqüentemente denunciados eram as lesões corporais (26,2%), seguido do crime de ameaça (16,4%).

Perfil da vítima que de violência doméstica que recorre à delegacia da mulher

Apesar de não haver uma sistematização dos dados, inclusive pela ausência de instrumentos de coleta uniformes e de utilização nacional e sistemática, é possível caracterizar a vítima de violência doméstica que procura as delegacias de polícia. Geralmente, é um mulher casada ou unida, com filhos, sem profissão ou renda própria, de baixo nível de escolaridade, conforme dados levantados, de forma assistemática pelas Delegacias de Atendimento à Mulher Vítima de Violência do estado do Rio de Janeiro. As Delegadas que estão à frente das delegacias da mulher, de um modo geral, chamam atenção para o fato de que mulheres de classes sociais de maior poder econômico também são vítimas de violência doméstica. No entanto, essas mulheres preferem, na maioria das vezes, recorrer a escritório particulares de advogados, sendo percentualmente baixa sua representatividade nas delegacias da mulher.

QUADRO XXIII Perfil Da Mulher Vítima De Violência Doméstica Que Já Recorreu À Delegacia Da Mulher, Rio De Janeiro 1996

| Nível de instrução | idade | Profissão | Existência de filhos | Estado civil |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Primário | 26 a 35 anos | Dona de casa sem redimento próprio | Sim | Casada ou unida |

Pesquisa realizada por SOARES (1996) no Rio de Janeiro, em 1992, junto às 04 delegacias de atendimento à mulher existente à época, as informações anteriores, conforme apontado no Quadro XXIV.

QUADRO XXV

Perfil de mulheres vítimas de agressão física, por recorrência à polícia - 1992

| Indicadores | Vítima |
|---|--------|
| Faixa Etária 26 a 35 anos | 43% |
| Agressor: marido/companheiro/ex-marido/ex-companheiro | 70,9% |
| Religião Católica | 39,5 |
| Religião Evangélica | 7,5% |
| Cor branca | 47% |
| Cor negra | 12,5% |
| Cor parda | 37,2% |
| Grau de instrução: 1º grau | 48% |
| Grau de instrução: Superior | 3,5% |
| Atividade não remunerada | 48,1% |

Fonte: SOARES, Luiz Eduardo, SOARES, Bárbara M. e CARNEIRO, Leandro, 1996

A violência contra as meninas e adolescentes

No quadro da criminalidade por motivo de sexo, desta-se a violência contra as meninas, em especial a violência sexual, fenômeno que também não encontra com estatísticas nacionais. Estudos setoriais, no entanto, apontam para a gravidade dessa criminalidade.

Segundo Azevedo (1988)^{vii}, a violência doméstica contra crianças e adolescentes apresenta características próprias: é uma violência interpessoal; revela abuso de poder dos pais ou responsáveis; é um processo contínuo, prolongando-se através dos anos, que ocorre no espaço doméstico, fica oculta e torna-se sigilosa, configurando-se como:

- a) violência física - pois utiliza o uso de força física no relacionamento com a criança ou o adolescente por parte de seus pais ou por quem exerce autoridade no âmbito familiar;
- b) violência sexual - por incluir ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual para si ou para outra pessoa;
- c) violência psicológica - por se apresentar sob variadas formas que constituem uma interferência negativa do adulto sobre a criança e sua competência social e conformando um padrão de comportamento destrutivo.

Minayo e Assis (1993) consideram a violência um fenômeno gerado pelos processos sociais. Existe, assim, uma violência estrutural que se apoia nas desigualdades sócio-econômicas, políticas e culturais. Esses autores, apoiados em dados do IBGE, de 1992, mostram como as crianças e os adolescentes estão sujeitos à violência estrutural contabilizando que:

“(...)53,5% das crianças e adolescentes brasileiros, entre 17 anos, encontram-se em famílias com renda mensal de até ½salário mínimo per capita. São 32 milhões de crianças e jovens vivendo em situação de pobreza e miséria, dois milhões a mais do que no início da década de 80. Essa situação de pobreza traz consigo múltiplos agravos à saúde, decorrentes, em grande parte, da total ausência de suporte social direcionado a essas famílias”^{viii}.

Dados do PNUD/IPEA sobre Desenvolvimento Humano no Brasil (1996) assinalam que um levantamento realizado em São Paulo, envolvendo 309 mil documentos oficiais, produzidos em 1981 naquele Estado, identificou 168 casos de abusos sexuais contra crianças, número considerado subestimado face ao silêncio que, culturalmente, cerca essa forma de violência. Nesse levantamento, cerca de 70% dos agressores eram pais biológicos e 93% das vítimas eram meninas. O PNUD divulgou outra pesquisa em que o pai biológico é apontado como responsável por 72% das agressões. Deve-se ressaltar que, nas duas pesquisas, não foi denunciada nenhuma mulher como agressora sexual de crianças.

Saffiotti^{ix} utilizando dados do CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância, destaca que as agressões físicas representavam, em 1992, 48% dos crimes cometidos contra as crianças, sendo que 52% eram meninas. Mãe e pai representam cerca de 18% dos agressores. Revela também que, em São Paulo, em 1993, eram os maus-tratos os crimes mais denunciados junto às Delegacias de Defesa da Mulher daquele Estado.

O Quadro XXVI indica números preliminares sobre maus-tratos contra crianças apontados por Saffiotti (1997), a partir de dados de Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo.

QUADRO XXVI
Violência Intrafamiliar - Maus-Tratos contra crianças
São Paulo

| Local Denúncia⁽¹⁾ | Ano | Total | Percentual Das Ocorrências Contra Menores (%) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1ª . DDM | 1991 | 135 | 39,0 |
| 1ª . DDM | 1992 | 91 | 33,6 |
| 8ª . DDM | 1992 | 36 | 28,3 |
| 1ª . DDM | 1993 | 52 | 48,1 |
| 8ª . DDM | 1993 ⁽²⁾ | 35 | 37,2 |

Fonte: Saffiotti, 1997

Notas: (1) DDM = Delegacia de Defesa da Mulher.

(2) Primeiro semestre de 1993.

Essa mesma autora, ao inserir a análise sobre violência de gênero em um quadro mais amplo da violência na sociedade brasileira, chama atenção para a questão racial. É sobre os meninos negros que recai a violência praticada nas ruas contra menores. Aponta para os dados da CPI da Criança e do Adolescente, de 1992, indicando que eram negros 82% dos meninos assassinados nos anos de 1988 a 1990.

Do conjunto das violências cometidas contra crianças e adolescentes destaca-se o abuso sexual, particularmente aquele cometido contra as meninas.

Definido como crime pelos diversos tipos penais existentes no Código Penal Brasileiro, o abuso sexual, tal como as demais formas de violência intrafamiliar, também permanece oculto pelo silêncio e pela precariedade dos dados estatísticos. Estudos realizado pelo UNICEF, em 1996, revelaram uma das faces desse crime:

“(...) de 1.000 agressões sexuais contra menores em São Paulo, entre 1988 e 1993, denunciadas ao SOS Criança, (...) mais de 75% foram cometidas por parentes - pela ordem, pai legítimo, avô, padrasto e tio. Meninas e meninos são atacados. E em todas as faixas de idade. As meninas com mais frequência e mais cedo: 8% das vítimas sofreram esse tipo de violência antes de completar 3 anos”.

O UNICEF informa, nesse mesmo trabalho, que, segundo o SOS Criança, de São Paulo, em 1993, mais de 50% das denúncias de abuso sexual acusaram o pai como abusador. Também destacou a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos da Infância do ABCD - CRAMI, São Paulo, de julho de 1992 a dezembro de 1994, sobre a incidência de maus tratos. Nessa pesquisa, identificou-se o abuso sexual em 10% dos casos. Do universo dos casos comprovados, 77% das agressões sexuais ocorreram dentro de casa. A maior parte das notificações (72%) foram feitas *pelas mães*. As vítimas eram 69,5% do sexo feminino e 30,5% do sexo masculino. As faixas etárias de maior concentração das vítimas eram de 3 a 6 anos (34,5%) e de 7 a 10 anos (48%). Ou seja, as crianças de 3 a 10 anos perfaziam 88,5% das vítimas^{ix}.

Pesquisa realizada na região metropolitana de Goiânia, entre 1992 e 1996, mostra uma parcela da magnitude do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No período foram registradas 636 ocorrências na Delegacia de Defesa da Mulher envolvendo 676 vítimas. Em 35,8% dos casos, o local de ocorrência da violência foi a residência da vítima. A mãe da vítima figura como a principal denunciante em 54,1% dos casos. Levando em conta o tipo de relação entre vítima e abusador, em 173 casos (27,6%) este era uma pessoa que mantinha relação de parentesco. Desse conjunto, 76 casos de abuso sexual foram praticados pelo pai biológico e 53 pelo padrasto (43,9%)^{xi}.

Sofrendo todas as formas de violência estrutural que atingem seu grupo etário mais amplo, as meninas estão sujeitas a formas específicas de violência, particularmente aquelas relativas ao abuso e à exploração sexual. Apesar das denúncias de organizações governamentais e não-governamentais e da mídia sobre a violência

cometida contra as meninas, persiste ainda intacta a rede de exploração da prostituição infantil e a violência doméstica caracterizada, segundo Saffiotti (1997)^{xii}, pelo abuso sexual incestuoso, perpetrado por pai biológico ou padrasto e de difícil comprovação face ao silêncio que cerca essa prática de violência no espaço familiar.

A violência contra a Mulher no Trabalho

Um tipo específico de violência contra a mulher é o assédio sexual no local de trabalho definido pela OIT como um comportamento que consiste em insinuações sexuais não solicitadas e desagradáveis, no pedido de favores sexuais e outras formas de conduta verbal, não verbal ou física, de caráter sexual, que têm a finalidade, ou surtem o efeito, de coagir, de forma inaceitável, o trabalho de uma pessoa ou de criar um ambiente de trabalho hostil, abusivo e ofensivo. O assédio sexual supõe uma relação assimétrica de poder e de abuso desse poder^{xiii}.

A advogada Radhika Coomaraswamy, nomeada Relatora Especial sobre a Violência Contra a Mulher pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 1994, chamou atenção para a situação das mulheres migrantes rurais que se empregam como trabalhadoras domésticas nas cidades. Segundo a Relatora, essas mulheres também estão submetidas a diversas formas de sexismo, racismo e discriminação social, agravadas pela situação de isolamento que vivem^{xiv}.

O assédio e a violência sexual mais explícita contra trabalhadoras domésticas não é um fenômeno novo no Brasil. Tradicionalmente, essa violência contou com a complacência das famílias que empregavam meninas oriundas, muitas vezes do interior do país, que perdiam contato com seus familiares e passavam a ser abusadas sexualmente pelos rapazes da família empregadora.

Apesar de não se constituir em um tipo de crime específico, o assédio sexual por ser um comportamento contra a liberdade individual, pode se constituir em crime de “constrangimento ilegal” punido pelo artigo 146 do Código Penal brasileiro. Trata-se, no entanto, de crime de difícil comprovação pois, geralmente, o assédio ocorre quando a vítima está a sós com o assediador.

Tal como o assédio sexual, também pode ser considerada “constrangimento ilegal” a prática da chamada “revista íntima” a que são submetidas mulheres que trabalham, principalmente, no setor de vestuário e que, diariamente, são obrigadas a sofrerem humilhações praticadas por agentes de seus empregadores.

Como já referido no item Metodologia, da mesma forma que outras situações de violência contra a mulher não existem estatísticas nacionais e nem mesmo estaduais ou municipais sobre assédio sexual. Além do recurso ao Poder Judiciário, na área trabalhista, ao Ministério Público do Trabalho e denúncia junto aos Conselhos Estaduais da Mulher as mulheres vítimas desse abuso não contam com serviços especializados de atendimento ofertados pelo Estado.

Políticas e Planos Nacionais, setoriais e institucionais para atender e erradicar a violência doméstica e sexual contra as mulheres

Poder Executivo Federal

No âmbito federal, destaca-se a elaboração e aprovação, em 1996, do Programa Nacional de Direitos Humanos, que contou com a parceria de organizações não-governamentais incluindo organizações de defesa dos direitos das mulheres, na sua redação e discussão. Este Plano tem um capítulo específico sobre as mulheres com clara preocupação com prevenção da questão da violência de gênero.

Através da atuação da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, convênios têm sido estabelecidos com governos Estaduais, Municipais, instituições não-governamentais e empresas para a difusão e implementação desse Programa.

A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e seu Departamento da Criança e do Adolescente têm estabelecido inúmeros convênios, com setores governamentais e não-governamentais, para a realização de pesquisas, seminários, publicações e programas de educação popular voltados para o respeito e proteção aos direitos humanos em geral e, em especial, aos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Objetivando a implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça criou o serviço disque-denúncia para o recebimento de denúncias relacionadas à exploração sexual infanto-juvenil e ao porno-turismo. Ainda voltado para a proteção desse segmento etário, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, por intermédio de seu Departamento da Criança e do Adolescente, implantou em 30 Centros de Defesa, distribuídos em 10 Estados, o Projeto Advoga Criança, com o objetivo de exercer a defesa jurídico-social de crianças e adolescentes.

No que concerne às mulheres, o Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM tem firmado convênios com instituições governamentais e não-governamentais para a produção de publicações, ações voltadas para a promoção da mulher negra, programas de capacitação legal de mulheres dos setores populares, seminários, audiências públicas com o Poder Legislativo, participação na Comissão de Reforma do Código Penal, dentre outras iniciativas.

O CNDM elaborou o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Sexual que tem dentre seus objetivos impulsionar a criação de serviços voltados ao atendimento de mulheres vítimas de violência. Nesse sentido, o CNDM firmou convênio com nove municípios para a construção de casas abrigos para mulheres vítimas de violência.

O CNDM elaborou, também, a Plataforma Estratégias da Igualdade para a implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil na IV Conferência Mundial da Mulher, em 1995. No entanto, o CNDM não possui autonomia financeira para implementar as ações propostas em seus documentos.

Poder Legislativo Federal

Tendo em vista as características da estrutura política do Estado Brasileiro a competência do Poder Legislativo no âmbito federal lhe confere um campo de atuação mais amplo. No entanto, deve-se apontar para a atuação do legislativo nos âmbitos estaduais e municipais, respondendo às demandas locais no que concerne, especificamente, à questão da violência de gênero e intrafamiliar.

O Poder Legislativo federal tem atuado na ratificação dos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, em especial sobre Direitos Humanos das Mulheres, na elaboração de Projetos de Lei e aprovação de leis que tratam de inúmeras matérias destinadas a eliminar as discriminações contra as mulheres.

No período de janeiro de 1991 a agosto de 1992 a Câmara dos Deputados instituiu a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – para apurar a violência contra as mulheres, obtendo informações qualitativas e quantitativas sobre esse fenômeno. Em 1992, a Câmara instituiu a CPI para apurar a violência contra as crianças e adolescentes, iniciativa que teve grande repercussão na imprensa brasileira, cujos dados revelaram a articulação entre as variáveis idade, sexo e raça das vítimas da violência.

Em 1997, a Câmara aprovou dotação orçamentária destinada à criação de casas-abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência intrafamiliar no montante de um milhão e setecentos e cinquenta mil reais que, no entanto, recebeu veto do Poder Executivo Federal^{xv}. Nesse mesmo ano, foi formada, na Câmara dos Deputados, Comissão Especial destinada ao Estudo das Medidas Legislativas que Visem a Implementar, no Brasil, as Decisões da IV Conferência Mundial da Mulher. Essa Comissão realizou, além de suas sessões ordinárias, audiências públicas com autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, professores e pesquisadores de universidades e representantes de organizações não-governamentais. A Comissão elaborou uma publicação destacando o seu mandato, os principais temas relativos à situação da mulher no Brasil, recomendações para políticas públicas na perspectiva de gênero e anexos estatísticos sobre participação política da mulher no Brasil^{xvi}.

Poder Executivo Estadual e Municipal

As ações do Poder Executivo devem ser observadas em seus distintos níveis de competência: federal, estadual e municipal.

Na área da violência, incluindo a violência contra mulheres e crianças, tendo em vista o caráter federativo do Estado brasileiro, a criação e a manutenção de instituições voltadas para a prevenção e repressão desse fenômeno são de competência

estadual. Desde meados da década de 80, diversos Estados brasileiros iniciaram a implantação de Delegacias de defesa da mulher que, hoje, chegam a mais de 255 unidades policiais.

Alguns exemplos podem ser apontados como parte da política dos Executivos estaduais. Dentre eles destacam-se: a criação, em 1991 do serviços de atendimento à mulher da Defensoria Pública do estado do Ceará e, em 1997, do Núcleo de Atendimento à Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Devem ser destacados, também, os CRAMI – Centros Regionais de Atenção ao Maus Tratos na Infância, em diversas cidades do Estado de São Paulo. A Delegacia de Costumes e Diversões Públicas do Distrito Federal inaugurou um telefone para denúncias de casos de exploração infanto-juvenil.

Em diversos Estados e Municípios foram organizados Conselhos Tutelares, com representantes da sociedade civil e do Estado, voltados para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Por ação do Poder Executivo Municipal têm sido criados, em algumas cidades brasileiras, como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, Ceará, Recife, dentre outras, abrigos para mulheres vítimas de violência e serviços de atendimento psicossocial. Ainda não existe uma pesquisa que avalie a concepção, metodologia de trabalho e resultados de todos esses abrigos. Destaca-se a exemplaridade do Abrigo Municipal para Mulheres vítimas de violência - Casa Viva Maria - de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

A articulação entre Executivo Estadual e Municipal e organizações da sociedade civil tem permitido a realização de ações junto ao Governo Federal através da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e do CNDM, órgãos do Ministério da Justiça. As ações governamentais Estaduais e Municipais devem ser objeto de criterioso levantamento, pois são fonte de experiências inovadoras e de grande impacto social.

Os governos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, através de seus Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher, em colaboração com o movimento de mulheres, elaboraram Convenções estaduais comprometendo-se a cumprir com os compromissos assumidos na IV Conferência Mundial da Mulher, incluindo aqueles referentes à prevenção e eliminação da violência de gênero.

Base das ações dos Poderes Executivo e Legislativo

Tanto os Planos do governo federal, as iniciativas do Poder Legislativo e dos poderes locais tomaram como base: A) as recomendações das inúmeras Conferências das Nações Unidas desta década, em especial as Conferências de Direitos Humanos, de 1993, de População e Desenvolvimento, de 1994, da IV Conferência Mundial da Mulher, de 1995, da Cúpula de Desenvolvimento Humanos, de 1995; B) os compromissos da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 1994; C) As propostas do movimento de mulheres que participou ativamente dos seminários e reuniões preparatórias das Conferências

internacionais e que, desde a década de 70, já apresentava sugestões concretas sobre políticas voltadas para a prevenção e o combate da violência contra a mulher.

As políticas de combate à violência de gênero, na esfera do governo federal, são de competência do Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher ou da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Tais órgãos têm competência para elaborar, executar e monitorar a implementação de tais políticas, pautando-se pelos Planos de Ação de Cairo (1994) e de Beijing (1995).

Em 1998, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos associada às agências das Nações Unidas lançou a Campanha “Uma vida sem violência é um direito nosso” voltada para a prevenção da violência intra familiar, em especial da violência contra as crianças e as mulheres, que culminou na assinatura pelo governo e por inúmeras organizações da sociedade civil do Pacto contra a Violência Familiar.

Também em 1998, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher associou-se ao CLADEM e outras organizações não-governamentais para o lançamento da Campanha “Sem as Mulheres os Direitos não são Humanos” .

Na esfera dos governos estaduais e municipais as políticas têm sido orientadas pelos Conselhos estaduais e municipais dos Direitos da Mulher, que também contam, tal como o CNDM, com inúmeras conselheiras representantes de instituições da sociedade civil, incluindo grupos e ONGs de mulheres. Os Conselhos estaduais e municipais são também órgãos com competência para elaborar, executar e acompanhar as políticas de gênero.

No entanto, tanto no nível federal, como nos níveis estadual e municipal, a falta de recursos financeiros e humanos destes Conselhos tem limitado sua atuação à elaboração das políticas e restringido sua capacidade de execução e acompanhamento. Os recursos existentes, tanto no plano federal, quanto nos planos estadual e municipal são extremamente modestos para a implementação de políticas voltadas à prevenção da violência e ao apoio de suas vítimas.

De um modo geral, as políticas sociais têm sofrido cortes severos, e devem continuar a sofrer face ao acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional - FMI. Saúde e educação que são áreas mais demandadas pelo conjunto da população poderão ser atingidas por esses cortes. Nesse sentido, a segurança das mulheres não deverá ser contemplada com recursos maiores. É bem verdade, que nos planos estadual e municipal, por pressão direta dos movimentos de mulheres, o fator político possa facilitar negociações nas dotações orçamentárias locais para programas e serviços voltados à luta contra a violência de gênero.

Ações do Poder Judiciário

A atuação do Poder Judiciário no que se refere ao repúdio à violência contra a mulher ganhou visibilidade em 1991, com a manifestação do Superior Tribunal de Justiça contra a tese da chamada “legítima defesa da honra”, considerada por este Tribunal como argumentação anti-jurídica e encobertadora da violência masculina contra as mulheres.

Alguns exemplos da justiça estadual indicam uma maior sensibilização do Poder Judiciário em relação à violência de gênero. Assim, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por iniciativa da Associação Nacional de Magistradas, da Associação Paulista de Magistrados e com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, realizou seminário para sensibilização de juízes da região em relação aos direitos humanos das mulheres. Iniciativa semelhante foi acompanhada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Em relação às crianças e adolescentes, os Juizados de Menores, em diversos Estados brasileiros, têm tido atuação importante na defesa desse contingente da população, através da aplicação e defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Cooperação Internacional

A última década registrou, também, um formidável esforço das Nações Unidas na ampliação da noção de Direitos Humanos no Brasil, incluindo a perspectiva de gênero, divulgando os instrumentos e mecanismos internacionais para a proteção desses direitos, apoiando projetos governamentais e de instituições não-governamentais na defesa dos direitos humanos das mulheres.

A visita da Relatora Especial sobre a Violência contra a Mulher, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ao Brasil, em 1996, foi de grande importância e teve repercussão nacional. Sua visita a diferentes estados brasileiros, contatos com grupos e ONGs de mulheres, bem como com autoridades públicas e delegadas de delegacias de mulheres deu mais alento à luta contra a violência de gênero.

Nesse sentido, é fundamental o aporte da cooperação internacional, particularmente das agências do sistema das Nações Unidas. A cooperação internacional, bilateral, multilateral ou de fundações privadas tem sido fundamental no desenvolvimento de pesquisas, seminários, implementação de serviços, articulação entre grupos governamentais e não governamentais.

Apesar das dimensões continentais do território brasileiro, da magnitude populacional, da descentralização política, os grupos de mulheres, particularmente as ONGs e o movimento autônomo de mulheres têm conseguido uma articulação dinâmica em todo o país. O apoio da cooperação internacional a estes grupos, ajudou-os a informatizar-se, a ter recursos para comunicação e acesso a dados qualitativos e quantitativos que reforçam sua ação interna e sua ação política junto ao Estado.

Em muitos estados, a criação, manutenção e permanência de delegacias de mulheres e de casas abrigo só foi possível pela pressão organizada de grupos articulados do movimento de mulheres, muitos apoiados pela cooperação internacional.

As ONGs e o Movimento de Mulheres:

A base conceitual para uma política de segurança das mulheres contra a violência de gênero.

As diversas instituições da sociedade civil, em particular as ONGs, os grupos e o movimento autônomo de mulheres tem um compromisso histórico na defesa dos Direitos Humanos em geral e, em particular, dos direitos humanos das mulheres. As ações desses setores da sociedade não têm ficado restritas às denúncias contra a violência de gênero. Organizações não-governamentais e movimento de mulheres têm sido ativos no levantamento de dados que possibilitam dar visibilidade a esse fenômeno, atuando na formação/informação da opinião pública para romper com a indiferença e a cumplicidade social que propiciam a impunidade dos agressores e o desamparo das vítimas. Essas organizações e movimento têm dado atenção à capacitação de profissionais das áreas de segurança e saúde públicas e cooperado com agências governamentais para a formulação e implementação de políticas sociais voltadas para o combate à violência contra a violência de gênero.

Fator importante para a ação desses grupos tem sido o apoio de agências de cooperação internacional, governamentais e não-governamentais, incluindo as Agência do sistema das Nações Unidas.

A ações da sociedade civil abrangem, também, outras instituições, destacando-se as universidades, públicas e privadas, que têm formado profissionais capazes de realizar estudos e pesquisas que, além de darem visibilidade à violência de gênero e intrafamiliar, contribuem para a compreensão desse problema, orientando direta ou indiretamente propostas de políticas públicas.

Diversas iniciativas, por todo o país, têm demonstrado o vigor das organizações não-governamentais na geração e desenvolvimento de campanhas voltadas para a prevenção da violência, de programas de apoio às vítimas desse fenômeno, de propostas de capacitação de policiais.

Outras ações estão voltadas para a produção de materiais educativos, livros, cartilhas e *spots* para rádio e televisão. Um grande esforço tem sido feito na direção da alteração legislativa – de forma a eliminar toda a discriminação presente nos textos legais – e na sensibilização do Poder Judiciário, buscando a superação dos padrões culturais calcados em discriminações e que reafirmam as desigualdades de gênero. Diversas organizações não-governamentais e grupos de mulheres atuam no oferecimento de serviços às mulheres vítimas de violência nas áreas da orientação jurídica, apoio psico-social e capacitação e requalificação profissional.

A luta contra a violência de gênero e intrafamiliar tem sido questão prioritária para os grupos autônomos e ONGs de mulheres desde a década de 70. O movimento de mulheres tem lutado pela criação, ampliação e reforço de serviços de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica e sexual nas áreas de segurança pública e justiça.

Definiu como estratégia demandar por mudanças legislativas; pela criação de serviços; pela ampliação do acesso à justiça e tratamento não discriminatório nesse

espaço, pela atuação junto à mídia, por ações voltadas para a educação legal de mulheres sobre seus direitos. Destaca-se, particularmente a partir de meados da década de 80, a atuação de mulheres do movimento negro na luta contra a discriminação racial e de gênero.

A histórica articulação desses grupos ganhou força na época pré-constituinte e consolidou-se com os avanços obtidos na Constituição de 1988.

Por esforço do movimento de mulheres, a partir de estudos e avaliações realizados por ONGs e pesquisadoras acadêmicas, tem havido avanço considerável, nesta última década, para a articulação entre as áreas de segurança pública, saúde, assistência social, educação e trabalho para um enfrentamento conjunto da problemática da violência contra a mulher.

Na década de 80, a proposta do movimento de mulheres para criação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres vítimas de violência, previa a criação de abrigos (área de responsabilidade das Secretarias de Ação Social); a reformulação do Instituto Médico Legal (área da Secretaria de Segurança Pública, em alguns estados); a criação de serviços de atendimento psicológico (área da Secretaria de Saúde); a criação de serviços de atendimento e orientação legal (área da Defensoria Pública ou da Procuradoria do Estado); de programas e campanhas de educação para mudança de mentalidades (áreas da secretaria de educação e comunicação social); de cursos de capacitação para inserção da mulher no mercado de trabalho (área da secretaria do trabalho); de criação de creches em horário integral (área das secretarias de educação e ação social), dentre outras.

Na realidade, poucos estados realizaram essas articulações que têm sido incentivadas pelo movimento de mulheres. Mesmo nos estados onde existem delegacias da mulher, abrigos para vítimas, serviços de orientação legal e psicológica, por exemplo, a articulação entre esses serviços ainda é muito deficiente. Essa é uma ação que merece maiores esforços e investimentos.

Algumas experiências demonstram a possibilidade dessas articulações. Por exemplo, no Rio de Janeiro, com o apoio do movimento de mulheres, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, tem se articulado com as Delegacias da Mulher no encaminhamento de vítimas. As Delegacia da Mulher, por outro lado, tem encaminhado mulheres para buscarem orientação psico-social no Conselho. Ambas as instituições, ligadas ao governo do estado, têm mantido contatos frequentes com o Abrigo para Mulheres vítimas de violência, mantido pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Por iniciativa de organizações não-governamentais desse estados, tem havido reuniões entre representantes da área de segurança pública e das secretarias estadual e municipal de saúde para discutir a elaboração de um protocolo entre as duas áreas visando facilitar o acesso à justiça das mulheres vítimas de violência e o pronto atendimento destas nos serviços de saúde, incluindo o acesso aos serviços de aborto legal, a contracepção de emergência e orientação sobre prevenção de DST/AIDS nos casos de violência sexual, bem como desburocratizar a realização do exame médico no Instituto Médico Legal, quando a vítima já tiver sido atendida em hospital da rede pública de saúde.

Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência – Casa Viva Maria, tem estabelecido articulação com a secretaria do trabalho e com empresas privadas para obtenção de postos de trabalho para mulheres abrigadas na Casa.

A sustentabilidade desses serviços exige, dentre outros requisitos: a) reforço da democracia com o respeito aos direitos humanos; b) pressão constante das ONGs e grupos de mulheres, o que pressupõe a necessidade de apoio e reforço a esse segmento da sociedade civil; c) a definição de políticas integradas e de estratégias nacional de atuação.

Marco Jurídico e administração da justiça

Marco Legal

No Brasil, não existe um tipo penal denominado “violência de gênero” na lei criminal. Apesar disso, o repúdio à violência praticada no âmbito das relações familiares tem tradição antiga no direito brasileiro. Apesar de apresentar inúmeros preconceitos contra a mulher, o Código Penal em vigor, que data de 1940, em seu artigo 61, ao relacionar as circunstâncias agravantes da pena pela prática de crimes, destaca maior severidade para o crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (inciso II, letra e); com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (inciso II, letra f) e contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida (inciso II, letra h).

Esse mesmo Código, na parte referente aos crimes contra os costumes, onde estão tipificados os crimes sexuais, incluindo o estupro, determina no artigo 226, inciso II que “a pena é aumentada de quarta parte: se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro tipo tem autoridade sobre ela”. Assim, o Código Penal é o recurso legal para processar e punir a prática de qualquer tipo de violência, incluindo a violência praticada contra a mulher, por motivo de seu sexo.

Reforçando esses dispositivos do Código Penal, e reconhecendo a existência da violência intrafamiliar, a Constituição Federal Brasileira vigente, de 1988, incorporou no Capítulo 226, referente à família, o parágrafo 8{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} que dispõe “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

Pelo princípio federativo que organiza a República brasileira, a Constituição tem alcance em todo território nacional. As leis estaduais e municipais têm que se pautar pela legislação federal, mas podem complementá-la. Nesse sentido, diversas constituições estaduais e leis orgânicas municipais incluíram dentre seus dispositivos preceitos que repudiam a violência doméstica e que prevêm a criação de serviços de proteção a mulheres vítimas de violência.

Assim, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 1989, dispõe:

Art. 33 – “Para garantia do direito constitucional de atendimento à mulher, vítima de violência, principalmente física e sexual, ficam instituídas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (...);

Art. 34 – “O Estado garantirá a criação e a manutenção de abrigos para acolhimento provisório de mulheres e crianças, vítimas de violência, bem como auxílio para subsistência, na forma da lei”

Art. 176, §2º - São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras que lhe são inerentes, as seguintes: (...)- V – patrocinar (...) a assistência jurídica integral às mulheres vítimas de violência específica e seus familiares”.

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 1990, no capítulo relativo ao desenvolvimento social, apresenta uma subseção denominada “Da assistência à Mulher”, que apresenta em seus artigos 364 a 370 inúmeras garantias à mulher, dentre as quais “abrigos para acolhimento provisório de mulheres e seus dependentes, vítimas de violência, bem como auxílio para sua subsistência, vinculados aos centros de atendimento integral à mulher, na forma da lei”.

A Constituição do Estado de São Paulo, de 1989, dispõe em seu artigo 278, dentro do Capítulo que trata “Da Proteção Especial”, que o Poder público promoverá programas especiais, incluindo, dentre eles, “a instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e vítimas de violência, integrados a atendimento psicológico e social”.

A Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 1990, dispõe em seu artigo 224 que o Município, de forma coordenada com o Estado, procurará desenvolver programas de combate e prevenção à violência contra a mulher, buscando garantir assistência social, médica, psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência e criação e manutenção de abrigos para as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica.

A Constituição do Estado de Pernambuco não tem nenhum dispositivo sobre proteção à mulher vítima de violência. A Lei Orgânica do Município de Recife, capital do estado, dispõe em seu artigo 163 que “A família, base da sociedade, tem proteção especial do Município, a quem competirá assisti-la de todas as formas, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

A Lei Orgânica do Município de Curitiba, capital do estado do Paraná, dispõe em seu artigo 202 que “Compete ao município, em consonância com a Constituição Federal, criar mecanismos para garantir a execução de uma política de combate e prevenção à violência contra a mulher, assegurando-se, em colaboração com o Estado, assistência médica, social e psicológica, a criação e a manutenção de abrigo às mulheres vítimas de violência”.

Dinâmica do Poder Judiciário

No Brasil, a administração da justiça criminal é de competência dos estados, exceto no que se refere aos crimes militares que são julgados pela Justiça Militar, de foro federal. Os crimes de homicídios dolosos são julgados por Juri Popular, presidido por Juiz de direito estadual. As decisões do Tribunal do Juri podem ser contestadas junto ao Tribunal de Justiça do estado ou mesmo junto aos tribunais federais superiores como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.

Os crimes de homicídio culposos e todos os demais crimes de natureza dolosa ou culposa, são julgados por um juiz singular, cabendo recurso, em segunda instância,

para o Tribunal de Justiça do estado, e em instância especial para o Superior Tribunal de Justiça que podem modificar o conteúdo da sentença.

Apesar de encontrar amparo legal na legislação vigente, os crimes cometidos contra as mulheres por motivo de seu sexo, como nos casos de crimes praticados por maridos ou companheiros, ou crimes de natureza sexual, como o estupro ou o atentado violento ao pudor, tendem a ficar impunes.

Há uma condescendência histórica do Juri popular para com maridos que assassinam suas esposas em nome da “legítima defesa da honra, apesar de manifestação em contrário do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão de 11 de março de 1991, reforçando a proposta política da Constituição Federal de 1988, das Constituições estaduais de diversos estados e das Leis Orgânicas de diferentes municípios de repúdio, de prevenção e punição da violência contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça – STJ rejeitou a chamada “tese da legítima defesa da honra”. Tal tese tem sido tradicionalmente utilizada, com muito sucesso” pelas defesas dos acusados de homicídios dolosos, julgados pelo Juri Popular, particularmente em casos de maridos que assassinaram suas esposas. Assim, em 1991, o STJ considerou que “... o homicídio não pode ser encarado como meio normal e legítimo de reação contra o adultério, pois nesse tipo de crime o que se defende não é a honra, mas a autovalia, a jactância, o orgulho do Senhor que vê a mulher como propriedade sua”.

No entanto, tendo em vista que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVII, assegura a soberania dos veredictos do juri popular, a decisão do STJ tem somente o poder de anular o Juri e convocá-lo para novo julgamento. Nenhum tribunal superior tem o poder de mudar a decisão do juri popular. Nesse sentido, em muitos estados da federação o juri popular ainda absolve em nome da “legítima defesa da honra”, embora tal decisão possa ser anulada e convocado novo julgamento, que, na maioria dos casos, torna a absolver o acusado.

Nos casos de crimes de lesão corporal, agressões físicas, há uma avaliação dos diversos operadores do direito envolvidos no processo, de que este é um crime menor, diante da escalada da violência urbana, e tende-se a arquivar o processo ou absolver o réu. A partir de 1995, entrou em vigor a Lei 9.099 que cria os juizados criminais especiais para apreciar delitos de “menor poder ofensivo” cuja pena máxima não seja superior a dois anos. A lesão corporal de natureza leve, tipificada no código Penal, no artigo 129, por essa nova lei passou a ser considerada “crime de menor poder ofensivo”, perdendo o caráter de ação pública, e passando a exigir uma ação privada da vítima para processar o acusado. Pela Lei 9.099, nesses casos, vítima e agressor podem fazer um acordo que tem o poder de sustar o processo criminal. De um modo geral, a lei apresenta uma solução alternativa às penas de prisão e permite a composição de conflitos sem a interferência do Estado. No entanto, levando-se em consideração a natureza do conflito e a relação de poder presente nos casos de violência doméstica contra a mulher, essa Lei acaba por estimular a desistência das mulheres em processar seus maridos ou companheiros agressores e, com isso pode estimular, também, a ideia de que os homens podem agredir suas mulheres.

No caso dos crimes sexuais, as mulheres vítimas podem, com muita facilidade, tanto no inquérito policial como no processo criminal ser considerada culpada. Isso porque há um duplo padrão de moral que vigora para homens e mulheres. Se a mulher foi estuprada pelo namorado, por um conhecido que lhe deu carona, sua palavra é colocada em dúvida, pois supõem-se que aceitou a relação sexual violenta. Da mesma forma, a mulher profissional do sexo, dificilmente terá chance de ver condenado seu estuprador. Deve-se registrar que, no Brasil, pelo artigo 107, incisos VII e VIII, o agressor da violência do estupro deixa de ser punido se casar-se com a vítima ou se esta vier a se casar com terceiro e não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 dias a contar da data da celebração do casamento. A lei tem por base que se o estupro não inviabilizou o casamento da vítima, o agressor pode ser perdoado com a extinção da punibilidade. Além disso, a lei penal brasileira utiliza a expressão “mulher honesta” para caracterizar as vítimas de alguns crimes sexuais, dentre eles o rpto violento (art.219). Tendo em vista a conotação diferenciada do termo “honesto” para homens e mulheres, e sua conotação sexual para estas últimas, as profissionais do sexo, por exemplo, não poderiam ser consideradas vítimas de rpto violento.

No caso de crimes praticados por familiares, maridos ou companheiros, apesar das leis reconhecerem como passível de punição maior a violência praticada no espaço doméstico e a violência sexual, na prática, tanto os membros do Juri Popular como os juízes de direito e demais operadores do direito partilham de uma cultura que avalia com complacência a violência doméstica e condena a mulher vítima da violência sexual como sua “provocadora”.

Deve-se destacar, também, que, apesar do Código Penal, no artigo 128, inciso II permitir a realização de aborto resultante de estupro, na prática as mulheres encontram sérias dificuldades para a realização desse direito. Em todo o País existem apenas 13 hospitais públicos autorizados a fazer a interrupção da gravidez em caso de estupro.

Apesar de alguns avanços, o Poder Judiciário tem sido ainda bastante refratário às críticas do movimento de mulher no que se refere à sua atuação nos processos que envolvem violência doméstica e sexual.

Como órgão auxiliar da justiça, a Defensoria Pública, subordinada ao Poder Executivo, apresenta duas experiências importantes no apoio às mulheres. Nos estados do Ceará, desde 1991, e no Rio de Janeiro, desde 1997, existem Núcleos de Atendimento à Mulher que buscam se articular com outras instâncias governamentais e não-governamentais. Também em São Paulo, a Procuradoria do Estado, desde a década de 80, mantém um Centro de Orientação Jurídica à Mulher.

QUADRO XXVII
Situação Legal da Mulher no Brasil - 1998

| LEIS | SITUAÇÃO (*) |
|--|---|
| • Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil | Reconhecimento de sua aplicabilidade interna pela Constituição Federal, em seu Artigo 5º, parágrafo 2º. |
| • Constituição Federal de 1988 | Completa igualdade entre homens e mulheres e reconhecimento de que é dever o Estado coibir a violência doméstica. |
| • Código Civil de 1916 | Mantém discriminações, embora a parte relativa à família, onde estão as maiores discriminações, esteja revogada pela Constituição Federal de 1988. |
| • Código Penal de 1940 | Mantém várias discriminações, embora puna com maior severidade os crimes praticados por familiares contra a vítima. |
| • Lei 9.099/96 | Torna o crime de lesão corporal de natureza leve, em crime de ação privada, passível de negociação entre vítima e agressor sem que ocorra processo criminal. Levando-se em conta as estatísticas policiais, cerca de 60% das lesões corporais cometidas contra as mulheres ocorrem dentro de casa, praticadas por seus maridos ou companheiros. |
| • Leis Trabalhistas | Completa igualdade entre homens e mulheres. Mantém discriminações contra trabalhadores domésticos de ambos os sexos na medida em que não lhes delimita a jornada máxima de trabalho, dentre outros direitos trabalhistas. |
| • Legislação Previdenciária | Completa igualdade |

(*)Tramitam no Congresso Nacional Projetos para a reforma dos Códigos Penal e Civil e para alterações das legislações trabalhista e previdenciária.

Conclusões e Propostas para o futuro

Conclusões Gerais

Resumimos algumas conclusões gerais que se descortinam a partir deste Informe:

- a) Apesar dos dados estatísticos ainda serem precários, é inegável a magnitude da violência doméstica e sexual contra a mulher no Brasil. No entanto esforços devem ser feitos para suprir a ausência de dados estatísticos nacionais para possibilitar a avaliação da real incidência desse tipo de violência e orientar políticas públicas de prevenção a essa violência, de apoio às vítimas e de repressão e ressocialização dos agressores;
- b) Diante da magnitude desse fenômeno e da extensão territorial e populacional do País ainda são escassos e precários os serviços existentes para atendimento às vítimas dessa violência apesar das demandas contínuas do movimento de mulheres por todo o Brasil;
- c) A violência doméstica e sexual contra a mulher reforça e é reforçada pelas discriminações de gênero que estão presentes em quase todos os indicadores sócio-econômicos e políticos. Nesse sentido, é inegável a discriminação maior sobre a população negra e, em particular contra as mulheres negras;
- d) É inegável que houve um esforço do Estado brasileiro, particularmente nos níveis estaduais de criar serviços para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. São necessários estudos e pesquisas que possam avaliar a qualidade desses serviços e seu alcance, possibilitando a geração de modelos a serem implementados em todo o País;
- e) É inegável, também, que a legislação brasileira, tendo por base a Constituição Federal de 1988, estabelece plena igualdade entre homens e mulheres. No entanto há grandes discrepâncias entre a lei e a realidade social, destacadas nos indicadores de injustiça social em geral e, em particular nos indicadores desagregados por sexo e cor;
- f) É inegável a disposição do Estado brasileiro em ratificar os Tratados e Convenções Internacionais de proteção aos direitos humanos, em especial aos direitos humanos das mulheres. Torna-se necessário, no entanto, que esses instrumentos sejam difundidos em toda a sociedade e que possam influir, com força de lei nacional, nas decisões do Poder Judiciário, área do Estado ainda pouco sensibilizada em relação à violência doméstica e sexual contra a mulher;
- g) A importância dada pelo Estado à luta contra a violência doméstica e sexual contra as mulheres não encontra correspondência nos poucos recursos alocados para a criação de serviços de apoio às vítimas ou para promoção de campanhas sistemáticas pela mídia visando interferir na educação pública e gerar novos padrões de relacionamento entre os sexos;

- h) O movimento de mulheres tem sido o grande ator impulsionador das políticas públicas de gênero, incluindo aquelas no campo da prevenção da violência contra as mulheres. Sua atuação nessa área tem sido sistemática e articulada em todo o País desde meados da década de 70, através através de grupos feministas autônomos, departamentos femininos de sindicatos, ONGs e associações de mulheres em geral. Tal movimento tem sido o fator decisivo na criação, implementação e continuidade dos serviços voltados para o apoio às vítimas de violência doméstica e sexual;
- i) Há no Brasil uma ação contínua das diversas agências do sistema das Nações Unidas que apoiam as diversas iniciativas governamentais e não-governamentais contra a violência doméstica e sexual contra mulheres e meninas;

Propostas

Neste Informe serão incluídos muitas das sugestões apresentadas no Documento **“Uma Vida Sem Violência é Um direito Nosso”** elaborado para a Campanha do mesmo nome, lançada pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e pelo Grupo Interagencial das Nações Unidas, em julho de 1998. Este documento elencou e sistematizou uma série de proposta para uma agenda para o futuro capaz de atuar contra a violência de gênero e intrafamiliar.

Para enfrentar o problema da violência contra as mulheres é de fundamental importância uma ação conjunta envolvendo as Agências do Sistema ONU, o Estado e a sociedade brasileira.

É necessário considerar a complexidade da sociedade brasileira organizada em distintos setores que devem ser envolvidos, de forma articulada, na luta contra a violência: ONGs, mídia, sindicatos, partidos políticos, associações de classe, associações de base, Igrejas, empresariado, movimentos sociais, escolas e universidades, dentre outros.

As ações conjuntas entre Estado e sociedade civil devem levar em conta a experiência já acumulada, potencializando as iniciativas em curso e estimulando novas medidas.

Apresentamos, a seguir algumas sugestões que encontram consenso no movimento de mulheres e em diversos setores da sociedade e do estado.

1. Ênfase deve ser dada à prevenção da violência e ao apoio às suas vítimas. Medidas punitivas devem ser complementadas por ações de ressocialização dos agressores.
2. A prevenção da violência deve incorporar diferentes estratégias: medidas legislativas; desenvolvimento de pesquisas e estudos que ajudem a compreender o fenômeno da violência intrafamiliar, sua magnitude e seu custo social, incluindo a criação de um Banco de Dados nacional; medidas no campo da educação formal e

informal, a serem desenvolvidas através do sistema de ensino, em todos os níveis, e da mídia; campanhas de sensibilização da sociedade em geral e de agentes públicos e privados, em particular os funcionários das áreas de segurança pública, saúde e de educação; capacitação de funcionários públicos e das autoridades envolvidas na atenção ao problema; dentre outras.

3. As medidas de apoio às vítimas da violência intrafamiliar devem considerar o conteúdo das medidas preventivas e oferecer às vítimas dessa violência: serviços especializados nas áreas de segurança pública e justiça, como por exemplo, Delegacias de Atendimento à Mulher, Centros de Orientação Legal; serviços especializados nas áreas da saúde física e mental e assistência social, como por exemplo, serviços médicos e psicológicos com profissionais sensíveis à problemática da violência intrafamiliar e de gênero e abrigos para mulheres e crianças vítimas de violência intrafamiliar; capacitação profissional e alocação no mercado de trabalho, dentre outras.

4. As medidas punitivas devem ser pautadas pelo respeito aos direitos humanos e incorporar as penas alternativas. Tais medidas devem ser acompanhadas de ações voltadas para a ressocialização do agressor, incluindo tratamentos para dependentes do álcool e outras drogas.

5. Tanto as ações preventivas, de assistência às vítimas, como as medidas punitivas e ressocializadoras devem ser monitoradas e avaliadas, continuamente, pelo Estado e setores da sociedade, através de instrumentos institucionais especialmente criados.

6. A elaboração de instrumentos nacionais de coleta e análise de dados é fundamental para suprir a falta de informações estatísticas confiáveis sobre a violência contra a mulher. A ausência de tais dados impede uma maior visibilidade desta problema. Nesse sentido, todos os diagnósticos elaborados até agora são considerados parciais.

Torna-se urgente a criação de bancos de dados sobre esse fenômeno e o fomento de pesquisas quantitativas e qualitativas que gerem maiores informações sobre as causas, a natureza, as dimensões, as características e as conseqüências da violência intrafamiliar e àquela perpetrada contra as mulheres. Nesse sentido, o IBGE deve reatualizar, ampliando o aspecto e incorporando novos indicadores, o Suplemento Justiça e Vitimização, em uma nova Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar. Além disso, deve-se uniformizar os registros de ocorrência de todas as Secretarias de Segurança Pública estaduais, incluindo novas informações que permitam a geração de dados capazes de caracterizar a dimensão e a tipologia da violência de gênero, bem como de traçar o perfil de vítimas e de agressores.

7. Seguindo as recomendações das Nações Unidas o Estado deve definir um calendário de ações para prevenir e eliminar as discriminações contra as mulheres, base cultural da violência de gênero. Nesse sentido, devem ser fixadas determinadas metas mínimas para impulsionar a completa igualdade entre homens e mulheres.

8. Deve ser dada ampla divulgação, inclusive entre os operadores do direito, dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, ainda pouco conhecidos no país.

9. Deve-se promover programas de educação para a cidadania com a difusão dos direitos dos cidadãos, mulheres e homens.

10. Deve-se envolver continuamente profissionais da área jurídica com a finalidade de oferecer assessoria legal, tendo em vista o alcance da igualdade diante da lei.

11. Deve-se promover, a nível nacional, a definição e a implementação de uma política integrada contra a violência de gênero, articulando os distintos setores do Estado e incorporando as contribuições das ONGs e grupos de mulheres.

Bibliografia

ABRAMOVAY, Miriam e CASTRO, Mary Garcia – Engendrando Um Novo Feminismo: Mulheres Líderes de Base, UNESCO/CEPIA, no prelo.

ABRAPIA – Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil – Relatório de abril de 1998 – ABRAPIA/Ministério da Saúde, Brasília, 1998.

ABREU, Alice, JORGE, Angela e SORJ, Bila – “Projetos de Geração de Renda para Mulheres de Baixa Renda: Reflexões a partir de Estudos de Caso no Rio de Janeiro”, in Os Desafios do Mundo do Trabalho, Revista Proposta, FASE, Rio de Janeiro, 1997

ALVES, Arlete Maria da Silva - “Cultura de Desigualdades: Raça, Movimentos Feministas e Justiça Ambiental” in Raça e Cultura, Revista Proposta, FASE, Rio de Janeiro, 1998.

ALVES, Lindgren – Os Direitos Humanos como Tema Global, Ed. Perspectivas, São Paulo, 1994.

ALVIM, Rosilene e VALLADARES, Lícia – “Infância e Sociedade no Brasil: Uma Análise da Literatura”, in Boletim Informativo Bibliográfico em Ciências Sociais, n{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} 26, Rio de Janeiro, 1990.

Articulação de Mulheres Para Beijing/95 – Documento do Seminário Estadual Violência Doméstica e Sexual, Tráfico de Mulheres e Violência Contra Meninas (os), Pará, 1994

AZEVEDO, M., GUERRA, V. – Crianças Vitimizadas: A Síndrome do Pequeno Poder, Ed. Iglu, São Paulo, 1989

Banco Mundial – Informe sobre el Desarrollo Mundial, Washington, 1993

BANDEIRA, Lourdes Maria – “O Que Faz da Vítima Vítima? “, in OLIVEIRA, Dijaci David, GERALDES, Elen Cristina e LIMA, Ricardo Barbosa (orgs.) – Primavera Já Partiu – Retrato dos Homicídios Femininos no Brasil, Editora Vozes/Movimento Nacional de Direitos Humanos, Brasília, 1998.

BARSTED – Leila de A. Linhares – Violência contra a Mulher e Cidadania: Uma Avaliação das Políticas Públicas, CEPIA, Rio de Janeiro, 1994.

BARSTED, Leila Linhares e LAVINAS, Lena – “Mulher e Trabalho: lei e Mercado”, in Os Desafios do Mundo do Trabalho, Revista Proposta, FASE, Rio de Janeiro, 1997.

BENTO, Berenice Alves de Melo – “O Acusado: Quem é? “, in OLIVEIRA, Dijaci David,
GERALDES, Elen Cristina e LIMA, Ricardo Barbosa (orgs.) – Primavera Já Partiu – Retrato dos Homicídios Femininos no Brasil, Editora Vozes/Movimento Nacional de Direitos Humanos, Brasília, 1998.

BRANDÃO, Elaine Reis – “Violência Conjugal e o Recurso Feminino à Polícia” in BRUSCHINI, Cristina e HOLLANDA, Heloisa Buarque (org) Horizontes Plurais: Novos Estudos de Gênero no Brasil, Fundação Carlos Chagas/Editora 34, São Paulo, 1998.

BRASILEIRO, Ana Maria (org.) – Las Mujeres Contra la Violencia: Rompiendo el Silencio, UNIFEM, N.Y., 1997.

BRUSCHINI, Cristina e HOLLANDA, Heloísa Buarque de –(org.) – Horizontes Plurais: Novos Estudos de Gênero no Brasil, Fundação Carlos Chagas/Editora 34, São Paulo, 1998.

CÂMARA, Luiza – Mulher da Vida – EGBA, Salvador, 1995

CARRILLO, Roxana – Battered Dreams: Violence Against Women as an Obstacle to Development, UNIFEM, N.Y., 1992.

CASTRO, Mary G. e ABRAMOVAY, Miriam – Gênero e Meio Ambiente – Editora Cortez/UNESCO/UNICEF, São Paulo, 1997.

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – Programa de Acción Regional para Las Mujeres de America Latina e Caribe – 1995-2001, Santiago, Chile, 1994.

CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria – Mulher, População e Desenvolvimento: Subsídios aos Parlamentares na Implementação do Plano de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, Brasília, 1996

CHIAROTTI, Susana e MATUS, Verónica – Os Direitos Humanos das Mulheres e das Meninas: Manual para Capacitação, Instituto de Gênero, Direito e Desenvolvimento/União Européia, Rosário, Argentina, 1997.

CLADEM –Viagiadas y Castigadas – Normatividade Penal y Mujer en America Latina y el Caribe, Lima, 1993.

CNDM – Conselho Nacional do Direitos da Mulher –Quando a Vítima é Mulher: Análise de Julgamentos de Crime de Estupro, Espancamento e Homicídio. CNDM, Brasília, 1987.

CNDM – Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – Beijing 1995 – O Século 21 Começa na IV Conferência Mundial da Mulher, CNDM-Ministério da Justiça, Brasília, 1995.

Comissão de Direitos Humanos – Relatório Azul – 1996 – Garantias ee Violações dos Direitos Humanos, Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – O Extermínio de Crianças e Adolescentes no Brasil, Câmara dos Deputados, Brasília, 1992.

Comissão Especial Destinada ao Estudo das Medidas Legislativas que Visem Implementar no Brasil as Decisões da IV Conferência Mundial da Mulher – Mulher, Política e Ação, Câmara dos Deputados, Brasília, 1997.

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento –CNDM – Seminário Nacional sobre Emprego e Violência – Brasília, 1998.

Comissão Nacional de População e Desenvolviemnto – Jovens no Brasil: Diagnóstico Nacional, Brasília, 1997

CORREA, Mariza – Morte em Família. Representações Jurídicas de Papéis Sexuais, Ed. Graal, Rio de Janeiro, 1983

DIMENSTEIN, Gilberto – A Guerra dos Meninos, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1990.

DORA, Denise Dourado – Masculino e Feminino - Igualdade e Diferença na Justiça, THEMIS / Ed. Sulina, Porto Alegre, 1997.

FALEIROS, Eva e COSTA, Ozanira (org.) – Políticas Públicas e Estratégias Contra a Exploiração Sexual Comercial e o Abuso Sexual Intrafamiliar de Crianças e Adolescentes, Ministério da Justiça/CECRJA, Brasília, 1998

GALDURÓZ, José Carlos, NOTO, Ana R. e CARLINI, E.A. – IV Levantamento sobre Uso de Drogas entre Estudantes de 1{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} e

2{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} Graus em Dez Capitais Brasileiras , USP/CEBRID, São Paulo, 1997.

GREGORI, Maria Filomena – Cenas e Queixas: Um Estudo sobre Mulheres, Relações Violentas e Prática Feminista, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1993.

Grupo Interparlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo – Herramientas Conceptuales: I - Módulo Legislativo sobre Violencia Contra la Mujer, N.Y., 1997

GUILLAUMIN, Colette – “Enquanto Tivermos Mulheres Para nos Darem Filhos: a Respeito da Raça e do Sexo” in Revista Estudos Feministas, CIEC/AECO/UFRJ, n{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} especial, Rio de Janeiro, 1994

HEILBORN, Maria Luiza – “O Traçado da Vida: Gênero e Idade em Dois Bairros Populares do Rio de Janeiro”, in MADEIRA, Felícia Reicher (org.) – Quem Mandou Nascer Mulher? : Estudos sobre Crianças e Adolescentes Pobres no Brasil, Editora Rosa dos Tempos/UNICEF, Rio de Janeiro, 1997

HEISE, Lori, PITANGUY, Jacqueline e GERMAIN, Adrienne – Violencia Contra la Mujer: La Carga Oculta sobre la Salud, OPAS/OMS, Washington, 1994.

HERMANN, Jacqueline e BARSTED – Leila de A. Linhares – O Judiciário e a Violência Contra a Mulher: A Ordem Legal e a (des) Ordem Familiar, CEPIA, Rio de Janeiro, 1995.

IBGE/PNAD – Participação Político-Social: 1988, vol.1 – Justiça e Vitimização, Rio de Janeiro, 1990.

Instituto del Tercer Mundo – Control Ciudadano, Montevideo

ISER/CPDOC-FGV – Lei, Justiça e Cidadania – Direitos, Vitimização e Cultura Política na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997.

ISIS internacional – El Mal Estar Silenciado – La Otra Salud Mental, Ediciones de las Mujeres, n. 14, Santiago, 1990

LAVINAS, Lena – “Gênero, Cidadania e Adolescência” in MADEIRA, Felícia Reicher (org.) – Quem Mandou Nascer Mulher? : Estudos sobre Crianças e Adolescentes Pobres no Brasil, Editora Rosa dos Tempos/UNICEF, Rio de Janeiro, 1997

MACHADO, Lia Zanota – “Matar e Morrer No Masculino e no Feminino”, in in OLIVEIRA, Dijaci David, GERALDES, Elen Cristina e LIMA, Ricardo Barbosa

orgs.) – Primavera Já Partiu – Retrato dos Homicídios Femininos no Brasil, Editora Vozes/Movimento Nacional de Direitos Humanos, Brasília, 1998

Ministério da Justiça – Programa Nacional de Direitos Humanos, Brasília, 1996.

Ministério da Saúde/OPAS/OMS – Violência Contra a Criança e o Adolescente: Proposta Preliminar de Prevenção e Assistência à Violência Doméstica, Brasília, 1997

OIT, Violencia en Contra las Mujeres en el Mundo Laboral, Equipo Tecnico Multidisciplinario de Santiago, Chile sem data.

PANOS – The Intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health, PANOS Briefing n{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} 27, , London, 1998

PIMENTEL, Sílvia , SCHRITZMEYER, Ana L. E PANDJIARJAM, Valéria, Estupro: Crime ou “Cortesia”? – Sérgio Fabris Ed., São Paulo, 1998.

PIOVESAN, Flávia – Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 2a. ed., Max Limonad, São Paulo, 1997.

PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, México, 1995.

PNUD/IPEA – Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, Brasília, 1996.

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Instrumentos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos, Centro de Estudos, São Paulo, 1997

Revista VEJA – Editora Abril, ano 31, n{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} 26, 01 de julho de 1998

ROSENBERG, Fúlvia – “O Discurso sobre a Criança na Década de Oitenta” in Cadernos de Pesquisa, n{SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 12} 87, Fundação Carlos Chagas, São Paulo, 1991.

RUFINO, Alzira – O Poder Muda de Mãos, Não de Cor, Série Mulher Negra, Santos, 1997.

SAFFIOTTI, Heleieth – “Exploração Sexual de Crianças”, in AZEVEDO e GUERRA (org.) A Síndrome do Pequeno Poder, Ed. Iglu, São Paulo, 1989.

SAFFIOTTI, Heleieth – “No Fio da Navalha: Violência Contra Crianças e Adolescentes no Brasil Atual”, in MADEIRA, Felícia Reicher (org.) – Quem Mandou Nascer Mulher? : Estudos sobre Crianças e Adolescentes Pobres no Brasil, Editora Rosa dos Tempos/UNICEF, Rio de Janeiro, 1997

SEADE – O Jovem na Grande São Paulo, Coleção Realidade Paulista, Fundação SEADE, São Paulo, 1988.

SILVA, Marlize Vinagre – Violência Contra a Mulher: Quem Mete a Colher? , Ed.Cortez, São Paulo, 1992.

SOARES, Lúiz Eduardo et alii (ORG) Violência e Política no Rio de Janeiro, ISER/Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1996

SOARES, Bárbara – “Delegacia de Atendimento à Mulher: Questão de Gênero, número e Grau” in SOARES, l.e. (ORG) Violência e Política no Rio de Janeiro, ISER/Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1996.

SOUSA, Sonia M.Gomes e MORAIS NETO, Ataliba Libânio de - Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Na Região Metropolitana de Goiânia (1992-1996), Fórum Goiano pelo Fim da Exploração, Violência e Turismo Sexual, Goiânia, 1997

SOUZA FILHO, Rodrigo et alii – Vidas em Risco: Assassinato de Crianças e Adolescentes no Brasil, IBASE, Rio de Janeiro, 1992.

The Center for Reproductive Law and Policy/DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Women of the World: Laws and Policies Affecting their Reproductive Lives – Latin american and Caribbean, N.Y, 1997.

THOMAS, Dorothy Q. – Injustiça Criminal. A Violência Contra a Mulher no Brasil, Americas Watch, 1991

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado, - Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, Sérgio Antonio Fabris Editor, São Paulo, 1997

UNICEF/IBGE – Indicadores Sobre Crianças e Adolescentes – Brasil 1991-1996, Brasília, 1997.

UNICEF – Situação do Abuso Sexual e da Prostituição Infanto-Juvenil no Brasil, Brasília, 1996. Assis, G. Simone e SOUZA, R. Edinilsa – “Morbidade por Violência em Crianças e Adolescentes do Município do Rio de Janeiro”, in Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, 1995.

VALDÉS, Teresa e GOMARIZ, Enrique – Mulheres Latinoamericanas Em Dados – Brasil, FLACSO/Instituto de la Mujer-Ministerio de Asuntos Sociales de España, Santiago, 1993

WASELFIZ, Júlio Jacobo (org.) – Juventude, Violência e Cidadania : Os Jovens de Brasília, Ed. Cortez/UNESCO, Brasília, 1998.

World Health Organization – Violence Against Women: Rape and Sexual Assault, 1997. Violence Against Women in Families, 1997.

World Health Organization - What non-governmental Organizations are doing, 1997.

ZALUAR, Alba – A Máquina e a Revolta. As Organizações Populares e o Significado da Pobreza, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1985

^{ix} Saffiotti, Heleieth – “No Fio da Navalha: Violência contra Crianças e Adolescentes no Brasil”, in MADEIRA, Felícia (org.) Quem Mandou Nascer Mulher, Ed. Rosa dos Tempos/UNICEF, Rio de Janeiro, 1997.

^x A esse respeito ver UNICEF – A Situação do Abuso Sexual e da Prostituição Infanto-Juvenil no Brasil, Brasília, fevereiro de 1996.

^{xi} Fórum Goiano pelo Fim da Exploração, Violência e Turismo Sexual – Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Goiânia, 1997.

^{xii} Cf. Saffiotti, Heleieth, opus cit.

^{xiii} OIT, Violencia en Contra las Mujeres en el Mundo Laboral, Equipo Tecnico Multidisciplinario de Santiago, Chile sem data.

^{xiv} Ver a esse respeito ver ISIS internacional – The 5th Anniversary of the World Conference on Human Rights, 1998.

^{xv} Conforme informação que consta do documento elaborado pela Comissão da Câmara dos Deputados

^{xvi} Comissão Especial Destinada ao Estudo das Menidas Legislativas que visem Implementar, no Brasil, as Decisões da IV Conferência Mundial da Mulher, Muler, Política e Ação , Brasília, 1997.

Filename: brazbigfile.doc
Directory: C:\WINDOWS\Desktop
Template: C:\WINDOWS\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: Campaña Interagencial contra la Violencia
Subject:
Author: Aparna
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/20/00 2:25 PM
Change Number: 5
Last Saved On: 5/23/00 6:37 PM
Last Saved By: Lola Salas
Total Editing Time: 7 Minutes
Last Printed On: 5/23/00 10:15 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 69
Number of Words: 19,748 (approx.)
Number of Characters: 112,566 (approx.)